

PERIODO 121°



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

17^a REUNION – 11^a SESION ORDINARIA
20/21 DE AGOSTO DE 2003

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado DANIEL O. SCIOLI,
del señor presidente provisional del Honorable Senado, ingeniero JOSE L. GIOJA,
y del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor ALFREDO A. LUQUES



PRESENTES:

ALPEROVICH, José J.
 ARANCIO de BELLER, Lylia M.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAGLINI, Raúl E.
 BAR, Graciela Y.
 BERMEJO, Norma N.
 BUSTI, Jorge P.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CASTRO, María E.
 COLOMBO de ACEVEDO, María T.
 CONTI, Diana
 CURLETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIOJA, José L.
 GÓMEZ de BERTONE, Deolide C.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. H.
 IBARRA, Vilma L.
 ISIDORI, Amanda M.
 JENEFES, Guillermo R.
 LAMBERTO, Oscar S.
 LATORRE, Roxana I.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MAESTRO, Carlos
 MARTÍ, Rubén A.
 MARTÍN, Floriana N.
 MAYANS, Miguel A.
 MAZA, Ada M.
 MERA, Mario R.

MONTOYA, Jorge L.
 MORALES, Gerardo R.
 MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 OCHOA, Raúl E.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PARDAL, Jorge A.
 PARDO, Angel F.
 PASSO, Juan C.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.
 SALVATORI, Pedro
 SAPAG, Luz M.
 SEGUÍ, Malvina M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 USANDIZAGA, Horacio D.
 VERNA, Carlos Alberto
 WALTER, Pablo H.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALIA, José L.

AUSENTES POR ENFERMEDAD:

CHIAPPE, Lázaro A.
 MORO, Eduardo A.

AUSENTES CON AVISO:

BARRIONUEVO, José L.
 BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo S.
 COLAZO, Mario J.
 MENEM, Eduardo
 PAZ, Elba A.
 RASO, Marta E.

EN COMISIÓN:

AGÚNDEZ, Jorge A.

SUMARIO

1. **Manifestaciones en minoría.** (Pág. 4615.)
2. **Izamiento de la bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 4615.)
3. **Juramento de la señora senadora electa Norma Nélida Bermejo.** (Pág. 4616.)
4. **Cuarto intermedio solicitado** por el señor senador Pichetto. (Pág. 4616.)
5. **Manifestaciones sobre acuerdos.** (Pág. 4616.)
6. **Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el proyecto de resolución** por el que se solicita acuerdo para designar **embajador en Bolivia** a Horacio Antonio Macedo (P.E.-255/03). Se aprueba. (Página 4617.)
7. **Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el proyecto de resolución** por el que se solicita acuerdo para designar al **doctor Luis Eduardo Lamberti** **síndico adjunto del Banco Central de la República Argentina** (P.E.-812/02). Se aprueba. (Pág. 4617.)
8. **Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el proyecto de resolución** por el que se solicita acuerdo para designar al **doctor Gustavo Alfredo Bruzone** como **juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional** de la Capital Federal (Sala I) (P.E.-92/03). Se aprueba. (Pág. 4617.)
9. **Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el proyecto de resolución** por el que se solicita acuerdo para designar al **doctor Fernando Adolfo Larrain** como **juez de la Cámara del Tribunal Oral N° 2 de la**

53. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los proyectos de comunicación del señor senador Jenefes (I) y de declaración de la señora senadora Lescano (II) relacionados con el desmonte indiscriminado de la selva pedemontana de las yungas en las provincias de Jujuy y Salta (S.-933 y 1.066/03).** Se aprueba. (Pág. 4672.)
54. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y otros señores senadores por el que se expresa preocupación por la pérdida de parte del patrimonio forestal argentino (S.-1.106/03).** Se aprueba. (Pág. 4674.)
55. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita el desarrollo de un régimen de gestión para la protección de los humedales (S.-1.170/03).** Se aprueba. (Pág. 4675.)
56. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de la situación por la que atraviesa la región fitogeográfica de las yungas (S.-1.188/03).** Se aprueba. (Pág. 4676.)
57. **Consideración del dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicita el dragado y señalización del río Uruguay, entre Punta Gorda y Concordia-Salto, Entre Ríos (S.-3.535/02).** Se aprueba. (Pág. 4677.)
58. **Consideración del dictamen de la comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos en el proyecto de comunicación de la señora senadora Negre de Alonso por el que se solicita la restitución de fondos coparticipables a San Luis (S.-1.155/03).** Se aprueba. (Pág. 4678.)
59. **Consideración del dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Martí por el que se solicita se dote al Centro de Control de Tráfico de Zárate de los medios electrónicos para el desarrollo de sus tareas (S.-3.376/02).** Se aprueba. (Pág. 4680.)
60. **Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de los señores senadores Lescano y Agúndez, por el que se dispone la realización de la I Jornada sobre Cárcel y Derechos Humanos a llevarse a cabo el 28 de agosto de 2003 (S.-1.645/03).** Se aprueba. (Pág. 4681.)
61. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, por el que se declara de interés legislativo la XXXII Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria, Comercio, Artesanías y Servicios, a realizarse en agosto de 2003 en Villa Angela, Chaco (S.-1.677/03).** Se aprueba. (Pág. 4682.)
62. **Moción de tratamiento sobre tablas de varios proyectos.** (Pág. 4682.)
63. **Consideración sobre tablas con dictamen de comisión del proyecto de ley en revisión por el que se otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada por la ley 24.584 (C.D.-42/03).** Se aprueba. (Pág. 4684.)
64. **Consideración sobre tablas del proyecto de ley enviado en revisión por el que se declaran insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, de punto final y de obediencia debida, respectivamente (C.D.-43/03).** Se aprueba. (Pág. 4698.)
65. **Consideración del proyecto de ley por el que se dispone la extensión hasta el 31 de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la renegociación del contrato de obras y servicios públicos (P.E.-207/03).** Se aprueba. (Pág. 4765.)
66. **Pedido de licencia formulado por el señor senador Moro.** Se aprueba. (Pág. 4771.)
67. **Renegociación de contratos de obras y servicios públicos (continuación) (P.E.-207/03).** Se aprueba. (Pág. 4771.)
68. **Asuntos entrados:**
 - I. **Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.** (Pág. 4797.)
 - II. **Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando el dictado del decreto 546/03, de necesidad y urgencia, por el que se reconoce a los estados provinciales el derecho a otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos en sus respectivas jurisdicciones (P.E.-256/03).** (Pág. 4797.)
 - III. **Comunicaciones de la Presidencia de la Nación.** (Pág. 4800.)

CLV. **Proyecto de declaración del mismo señor senador declarando de interés el XI Congreso de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa** (S.-1.785/03). (Pág. 4979.)

CLVI. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador solicitando informes acerca del cumplimiento del artículo 3º del decreto 1.654/02, sobre medidas fiscales en beneficio del transporte aerocomercial** (S.-1.786/03). (Pág. 4980.)

CLVII. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador solicitando se deje sin efecto la resolución 58/01 acerca de la aftosa** (S.-1.787/03). (Pág. 4982.)

CLVIII. **Proyecto de ley del mismo señor senador sobre fomento de la realización de esculturas por artistas plásticos argentinos** (S.-1.788/03). (Pág. 4983.)

CLIX. **Proyecto de resolución de la señora senadora Fernández de Kirchner, constituyéndose en tribunal en el juicio político al señor ministro de la Corte, doctor Eduardo Moliné O'Connor** (S.-1.791/03). (Pág. 4984.)

69. Apéndice:

I. **Sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 4984.)

II. **Inserciones.** (Pág. 4988.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 45 del miércoles 20 de agosto de 2003:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: pido que se llame a los senadores que están en los despachos para que podamos empezar la sesión. Está prevista una larga agenda para el día de hoy. También solicitamos a los senadores que tengan continuidad en la presencia en las bancas para poder dar tratamiento a todos los temas.

Sr. Presidente. — Damos cinco minutos y pedimos a los colaboradores de los bloques que llamen a las señoras y señores senadores.

Vamos a repartir las tarjetas para el voto nominal electrónico.

—Se continúa llamando.

—A las 16 y 47:

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por Mendoza, doctor Raúl Baglini, a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Baglini procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

3

JURAMENTO DE LA SEÑORA SENADORA ELECTA

Sr. Presidente. — La Presidencia informa que con fecha 29 de noviembre de 2001 fue aprobado el dictamen con los pliegos de la totalidad de los señores senadores titulares y suplentes.

En consecuencia, corresponde tomarle juramento a la señora senadora suplente por la provincia de Córdoba, señora Norma Nélida Bermejo.

Por Secretaría se la invitará a ingresar al recinto. Ruego a los presentes ponerse de pie.

—Así se hace.

Sr. Presidente. — Señora senadora nacional electa por la provincia de Córdoba, Norma Nélida Bermejo: ¿Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?

Sra. senadora electa Bermejo. — ¡Sí, juro!

Sr. Presidente. — Si así no lo hicieris, Dios y la Patria os lo demanden. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

En consecuencia, queda incorporada a este Honorable cuerpo la señora senadora por la

Vamos a votar los pedidos de abstención solicitados por la senadora Escudero y el senador Salvatori.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). — Quedan autorizados.

En consideración en general.

Me dicen que el sistema electrónico funciona. Les voy a pedir a todos que introduzcan la tarjeta como corresponde. La tecla verde es para votar por la afirmativa en el expediente C.D.-43/03 por el cual se declaran insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521.

—Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Gioja). — En el tablero de cada senador debe aparecer el nombre para saber si realmente funciona. En caso contrario, vota luego.

—Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Gioja). — Vuelvo a repetir, la tecla verde es positivo, la roja es negativo Tiempo.

Sr. Mayans. — No funciona la señalización de la tecla verde de mi banca.

Varios señores senadores. — ¡No prende!

—Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Gioja). — Vamos a proceder a votar nominalmente. (*Aplausos en las galerías*)

—Se practica la votación nominal.

—Votan por la afirmativa los señores senadores Alperovich, Arancio de Beller, Avelín, Bar, Bermejo, Busti, Cafiero, Caparrós, Capitanich, Colombo, Conti, Daniele, Fernández, Fernández de Kirchner, Gallia, Gioja, Gómez de Bertone, Guinle, Ibarra, Jeneffs, Lamberto, Latorre, López Arias, Martín, Mayans, Maza, Montoya, Morales, Müller, Negre de Alonso, Ochoa, Oviedo, Pardal, Passo, Perceval, Pichetto, Puerta, Sapag, Seguí, Terragno, Verna y Yoma.

—Votan por la negativa los señores senadores Baglini, Gómez Díez, Losada, Maestro, Martí, Taffarel y Walter.

—Se abstiene la señora senadora Escudero.

—En particular es igualmente afirmativa

Sr. Presidente (Gioja). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley por amplia mayoría. Se harán las comunicaciones correspondientes. (*Aplausos y manifestaciones en las galerías*)

65

RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente (Gioja). — Corresponde considerar el proyecto de ley contenido en el expediente 207/03 por el que se dispone la extensión hasta el 31 de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la renegociación del contrato de obras y servicios públicos. Hay un dictamen en mayoría y dos dictámenes en minoría.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Canals). — (*Lee:*)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° — *Objeto:* Créase el Tribunal de las Prácticas Profesionales (TPP), en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Tiene por objeto atender los reclamos de los particulares por responsabilidad en las prácticas profesionales.

Art. 2° — *Ámbito de aplicación:* quedan comprendidas en la presente ley las actividades profesionales de las personas físicas que han concluido la carrera de grado en universidad o en nivel terciario ajustado a los planes de educación y formación profesional, y se encuentran habilitadas para el ejercicio de la profesión de conformidad con los reglamentos de su actividad; y las personas jurídicas, públicas o privadas, que vinculan a profesionales por contrato de trabajo, relación de empleo, u obra eventual.

Art. 3° — *La buena práctica:* la buena práctica del acto profesional importa el fiel cumplimiento de los reglamentos, protocolos, códigos de ética y de procedimientos, técnicas homologadas por autoridad competente, estatutos y toda norma que regula la actividad de que se trate.

Art. 4° — *Derecho:* la persona que a consecuencia del acto profesional sufre un daño, o sus derechohabientes, percibe la indemnización conforme el artículo 6° inciso f).

Art. 5° — *Tribunal de las Prácticas Profesionales:* el Tribunal de las Prácticas Profesionales (TPP) se constituye con un directorio y con las comisiones profesionales (CP) que por la naturaleza del reclamo se requieran.

Art. 6º - *Directorio*: el directorio se integra con cinco (5) miembros designados por la autoridad de aplicación, cuyos mandatos duran dos años, pudiendo ser redesignados indefinidamente. Para su designación se requiere antigüedad en la profesión similar a la exigible para ser juez de primera instancia.

Son sus funciones:

- a) Administrar los bienes y recursos del TPP;
- b) Designar el personal del TPP;
- c) Convocar a la integración de la comisión profesional (CP) competente en razón de la materia y la naturaleza del reclamo. La integración la realiza mediante sorteo en el listado de profesionales de cada actividad, que confecciona y que actualiza anualmente;
- d) Verificar la legalidad del procedimiento de la comisión profesional;
- e) Resolver, otorgando validez y fuerza de cosa juzgada, o rechazando el dictamen de la CP;
- f) Fijar el monto de indemnización conforme baremo respectivo;
- g) Determinar las costas del procedimiento, fijando los honorarios de los integrantes de las comisiones profesionales conforme la extensión y complejidad de la labor desempeñada;
- h) Confeccionar el reglamento interno y el régimen disciplinario para el personal a su cargo, y para los profesionales intervinientes en cada comisión profesional;
- i) Llevar un registro estadístico integral de las actuaciones de la CP;
- j) Aplicar las multas y demás sanciones que correspondan;
- k) La función de los directores del TPP es excluyente de toda otra actividad mientras conserven sus cargos, con excepción del ejercicio de la docencia.

Art. 7º - *Las comisiones profesionales*: las comisiones profesionales se constituyen en razón de la materia con tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes de la profesión de que se trate. Cada profesional no es nuevamente desinsaculado hasta que no haya sido sorteada la totalidad del listado de su actividad; salvo por excusación o recusación, admitidas.

Art. 8º - *Procedimiento. Inicio*: el Tribunal de las Prácticas Profesionales recepta el escrito de reclamo, fundado en las pruebas ofrecidas. El directorio constituye la CP conforme a lo establecido en el artículo 6º inciso c) dentro de los seis días. Los profesionales designados pueden excusarse por causa fundada, dentro del plazo de dos días de comunicada su convocatoria, admitida la excusación se procede a su reemplazo por idéntico procedimiento.

Art. 9º - *Convocatoria*: constituida la CP, convoca a las partes a audiencia a celebrarse a los veinte días de su constitución, mediante notificación.

Art. 10. - *Notificación*: La notificación debe realizarse dentro de los cinco días posteriores a la constitución de la CP. En la misma debe indicarse la carátula del reclamo, objeto, prueba, monto, miembros de la CP y domicilio del TPP.

Art. 11. - *Impugnaciones*: notificada la parte, puede impugnar algún miembro de la CP, dentro del tercer día, cuyo plazo es improrrogable. El directorio resuelve la impugnación dentro de los tres días de su presentación. Su resolución es inapelable.

Art. 12. - *Audiencia*: reunida la audiencia, la CP procede a leer el reclamo y su fundamento. Acto seguido en primer lugar expone el reclamante, asistido por hasta dos profesionales, pudiendo agregar las pruebas que considere oportunas y aportando las copias según el número de reclamados. A continuación exponen el o los reclamados, en el orden de su intervención en el acto profesional impugnado, y en caso de las personas jurídicas, su representante legal. Los reclamados son asistidos por hasta dos profesionales.

Art. 13. - *Debate*: oídas las partes y en su caso los profesionales de parte, se abre debate, que no puede extenderse más de dos días. Si la particularidad del caso hiciere necesario estudios o pruebas de compleja producción, con intervención de organismo especializado, se estará a su producción, en un plazo no mayor de treinta días corridos, salvo fuerza mayor. Hecho, se reanuda el debate. Concluido el debate pasa el expediente a memorial.

Art. 14. - *Memorial*: dentro del tercer día las partes pueden presentar memorial. El plazo es común. Vencido el plazo queda el expediente para dictaminar.

Art. 15. - *Dictamen*: la CP debe dictaminar a los diez días. Hecho, eleva el expediente al TPP.

Art. 16. - *Resolución*: el TPP resuelve a los diez días. Confirma y fija el monto de indemnizaciones, o rechaza el dictamen; y determina costas.

Art. 17. - *Notificación de la resolución*: la resolución del TPP se notifica dentro de los cinco días posteriores a la misma en la sede del Tribunal, debiendo concurrir personalmente las partes o apoderados.

Art. 18. - *Consentimiento*: vencido el plazo del artículo 17 la resolución del TPP tiene fuerza de cosa juzgada, salvo expresión de no consentir.

Art. 19. - *Subsidiariedad*: subsidiariamente rigen la actividad del TPP y de las CP, la ley de procedimiento administrativo 19.549 y los códigos de procedimientos de la Justicia de la jurisdicción de origen del reclamo.

Art. 20. - *Título ejecutivo*: la resolución consentida y ejecutoriada tiene carácter de título ejecutivo.

Art. 21. – *Vía judicial ordinaria*: la resolución no consentida en los términos del artículo 18, habilita por el plazo de 180 días para recurrir por la vía judicial ordinaria. Vencido el plazo queda firme la resolución del TPP.

Art. 22. – *Eximición de mediación previa. Citada en garantía. Previsión*: el reclamo tramitado ante el TPP exime de la obligación del artículo 1º de la ley 24.573. Interpuesta la demanda en sede judicial dentro del plazo del artículo 21, la citada en garantía debe constituir previsión hasta el máximo que prevé el baremo que a esos efectos determinará la autoridad de aplicación.

Art. 23. – *Financiamiento*: el financiamiento de la actividad del TPP y de las CP se compone con los ingresos por aranceles y multas que determine el directorio, y las partidas que se dispongan en el presupuesto general de la administración. El TPP puede aceptar donaciones, legados y otros ingresos provenientes de instituciones del país y del extranjero.

Art. 24. – Se invita a los gobiernos de las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir al presente procedimiento de resolución de controversias.

Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Mercedes M. Oviedo. – María C. Perceval.
– Graciela Y. Bar. – Ada Maza. – Beatriz Halak.*

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Conocido es que nuestros juzgados y tribunales del país atraviesan por una situación de proliferación de reclamos de los particulares, que han puesto en algunos casos, al borde del colapso el normal funcionamiento del sistema de administración de justicia.

Específicamente, en las acciones por daños y perjuicios fundadas en la mala práctica de los profesionales, tal congestión produce demoras en la resolución de estos casos. El resultado de esta situación muchas veces se traduce en la imposibilidad de satisfacer la demanda, dado que mientras tramita el proceso nos encontramos con compañías de seguros que desaparecen y demandados que se desapoderan de sus bienes.

Por otra parte, y en el caso que el reclamo sea ilegítimo el profesional demandado se ve envuelto en una situación en la que se pone en duda su capacidad durante el extenso proceso y al final del mismo es poco probable que recupere su credibilidad ante la sociedad.

Esta situación crítica, que se prolonga en el tiempo, nos exige soluciones acorde con los tiempos de crisis que vivimos. Debemos esforzar el ingenio en la búsqueda de mecanismos idóneos para llevar sa-

tisfacción al reclamante y a la vez, descongestionar el cúmulo de demandas que atiborran los juzgados y tribunales.

En ese sentido, la solución que proponemos es, en nuestra opinión, viable. Se trata de la creación del Tribunal de las Prácticas Profesionales, como organismo en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. El cual actuará como vía previa para la resolución satisfactoria de los conflictos por reparación que se persigue con la demanda por indemnización.

Ante este tribunal acudirán los particulares que reclamen por daños cuya causa generadora se impute a un acto profesional que haya quebrantado la *lex artis*.

Conforme se dispone en el proyecto el tribunal convoca a la constitución de la comisión profesional, que se integra con profesionales de la misma profesión del reclamado. La comisión tendrá a su cargo la evaluación de la pretensión, la prueba de que se vale y la defensa u oposición del reclamado; concluyendo con un dictamen, no vinculante, que eleva al directorio a efectos de refrendar la resolución que hará lugar o no al reclamo.

El procedimiento habrá de desarrollarse en un lapso de tiempo abreviado, logrando que el particular tenga las garantías del debido proceso, en el que se ventilará su pretensión y fundamento. De modo que de ser favorablemente acogido el reclamo, se arribará a una justa, equitativa, efectiva e inmediata indemnización.

Entendemos que esta vía será una herramienta útil, ágil, que permita una adecuada revisión del acto profesional impugnado.

Tras lo cual corresponderá al Tribunal de las Prácticas Profesionales, expedir la resolución que tendrá fuerza de cosa juzgada en caso de consentimiento de las partes.

Corresponderá, como en toda contienda en que se debate cuestión patrimonial y exista contrato de responsabilidad profesional, la citación en garantía del asegurador del reclamado, que podrá seguir las alternativas del procedimiento, pero que se ajustará a la resolución del tribunal.

También prevé el régimen propuesto, para el caso de resultado no satisfactorio para alguna de las partes, la instancia judicial. Mas en tal circunstancia, la citada en garantía deberá provisionar según lo establecido en el baremo de la actividad de que se trate.

Dicho de otra forma, si hay acuerdo y conformidad con lo dictaminado por la comisión profesional, la resolución del tribunal precluye el reclamo, y no podrá demandarse por incremento del monto indemnizatorio en sede judicial. Pero de no arribar a tal extremo, queda expedita la vía judicial. De este modo, la citada en garantía, al provisionar conforme baremo, tiene oportunidad de consolidar el ne-

gocio jurídico que es el contrato de seguro, que se ajustará en su prima, a los costos de cada actividad profesional asegurada.

La finalidad de este proyecto de ley es fortalecer la capacidad de resarcimiento en caso de resultado dañoso. Desde luego no se persigue irresponsabilidad, sino la adecuada cobertura de los riesgos emergente del ejercicio de una profesión.

Nuestra legislación de fondo y de forma nos garantiza el ejercicio de las acciones por responsabilidad civil. La abundante jurisprudencia que se recopila en los juzgados y tribunales civiles en nuestro país, es demostrativo de ello. Pero lo que no dicen los fallos es que entre el hecho generador y la sentencia que ordena el pago de la indemnización reparadora, muchas veces han transcurrido varios años. Tiempo a veces excesivo, para finalmente ver esfumada la expectativa de justicia.

Por todo lo expuesto, solicito se apruebe de este proyecto de ley.

*Mercedes M. Oviedo. — Maria C. Perceval.
— Graciela Y. Bar. — Beatriz Halak.*

Sr. Presidente (Gioja).— En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto.— Hemos acordado con el bloque de la Unión Cívica Radical y con otros bloques que por cada bloque hable un senador; eso si no hay otro senador que quiera hacerlo. El principio es el de dar un tratamiento rápido y corto para aprobar este tema que es tan importante para el Poder Ejecutivo nacional.

Sr. Presidente (Gioja).— Así se hará.

Tiene la palabra el señor senador Pardal.

Sr. Pardal.— En primer lugar, agradezco a los señores senadores integrantes de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transportes, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación General que participaron en la discusión, así como también a todos los senadores, en general, y los aportes y el interés demostrado, más allá de los disensos para que esta norma tan importante para los intereses del país y de nuestra sociedad pueda ser tratada rápidamente.

También quiero agradecer al ministro De Vido su presencia en la reunión plenaria de las comisiones, donde se respondió a distintos requerimientos de los señores senadores sobre este proyecto.

Antes de entrar al tratamiento específico del proyecto, quiero hacer algunas consideraciones previas que me parecen fundamentales para

reafirmar la importancia de la norma que hoy estamos tratando.

La economía argentina asistió, desde principios de la década del 90, a un proceso de profundas transformaciones estructurales ligado a distintos factores. Fundamentalmente, uno de esos factores fue el fracaso del Estado a fines de la década del 80. En ese marco se inicia una vasta y abarcativa política de privatización de empresas públicas, que constituyó uno de los ejes centrales del programa de gobierno de principios de la década del 90.

Para ser sinceros, debemos recordar que hubo un fuerte respaldo y consenso para este proceso en los primeros años de la década del 90, dado que los argentinos estábamos cansados de la ineficiencia de nuestras empresas públicas y de los problemas que causaba su gestión. Junto con este proceso apareció una norma que comenzó a ser casi más importante que la Constitución Nacional: la Ley de Convertibilidad. No nos dimos cuenta, fascinados por los resultados inmediatos, de los impactos estructurales que el conjunto de las medidas tomadas estaba produciendo; fundamentalmente, sus principales resultados estructurales fueron que resultó absolutamente negativa para la rentabilidad de las empresas productoras de bienes, derivó en una consecuente pérdida de competitividad de nuestra industria nacional y, lo que fue igualmente grave, la Argentina sufrió una regresión en la distribución del ingreso.

Nos equivocamos no al privatizar sino en cómo lo hicimos: nos fuimos de un extremo al otro; pasamos de un Estado omnipresente a un Estado ausente. Al respecto, la debilidad y precariedad del control y de la regulación es una característica de la experiencia privatizadora en la Argentina.

No somos antiempresas ni mucho menos, ni queremos volver nostálgicamente al pasado de las empresas de servicios en manos del Estado. Nos acordamos del 90 y también de los 80, pero creemos que no pueden existir empresas que tengan una renta que vaya en contra de la realidad del país. Todas las empresas argentinas o extranjeras de servicios o de producción de bienes tienen que entender que son parte de una misma realidad, y en esa realidad hay hechos que acontecieron en los últimos tiempos que nos tocan a todos. Incluso, por supuesto, a las empresas de servicios públicos.

¿Cómo les fue a las empresas concesionarias hasta diciembre de 2001? Muy bien. Es cierto, a algunas empresas les fue mejor que a otras, como siempre ocurre. Pero la mayoría tuvo una rentabilidad en dólares muy superior a la que hubieran obtenido por la misma actividad en cualquier otra parte del mundo.

Pero, además, tuvieron una rentabilidad muy superior al resto de las empresas radicadas en la Argentina y productoras de bienes transables.

Esto no fue neutro para nuestro país y los resultados lamentablemente están a la vista.

El costo de los servicios públicos en la Argentina sacó de competencia a la industria nacional. La reducción de la actividad manufacturera produjo reducción de puestos de trabajo y, por ende, desocupación. La desocupación trajo pobreza y el resto de la historia ya la conocemos.

Es decir que hoy en día el tema de los servicios públicos y su incidencia en el llamado costo argentino fue, sin duda, un elemento determinante.

Lo que hay que encontrar es un camino que nos lleve a una situación de nuevas y reales relaciones entre el Estado, representando el interés general, y las empresas prestatarias de servicios.

Estas nuevas relaciones significan una profunda reedición de los contratos existentes. Para ello habrá que tener en cuenta aspectos generales que involucren a todos los servicios, pero fundamentalmente la situación propia de cada contrato en particular.

En este sentido, quiero anticipar algunos de los aspectos relevantes que, a mi entender, se han modificado entre el momento en que se realizó la mayoría de las privatizaciones y la situación actual.

Este aspecto me parece fundamental a la hora de fijar criterios porque parece que para algunos lo que cuenta es lo que ocurrió desde diciembre de 2001 en adelante y, según mi opinión, lo que corresponde revisar son las privatizaciones desde el momento de su realización hasta el día de hoy.

Hay dos cláusulas claves que eran comprensibles en aquel momento, pero que de ninguna manera debieron subsistir durante tanto tiempo.

Me refiero a la dolarización de muchas de las tarifas y al reconocimiento de un ajuste por el índice de inflación de los Estados Unidos. Esto ha generado una doble situación de privilegio.

Quiero citar cifras obtenidas de un estudio realizado por la FLACSO que afirma que, a partir de una interpretación ad hoc de las disposiciones de la Ley de Convertibilidad, las empresas han ajustado sus tarifas de acuerdo a la evolución de índices de precios de los Estados Unidos que, como todos saben, han crecido por encima de sus similares en el ámbito local.

En efecto, entre el mes de enero de 1995 y junio de 2001 en la Argentina el índice de precios al consumidor registró una disminución acumulada del 1,1 por ciento al tiempo que los precios mayoristas se incrementaron en un 1,6 por ciento. En idéntico período, el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos registró un incremento acumulado del 18,4 por ciento, al tiempo que los precios mayoristas lo hicieron en un 9,8 por ciento.

Esto potenció una falencia inicial, cual fue la de fijar elevados precios tope de partida a las tarifas de la mayoría de los servicios. Además, está claro que esto se hizo ignorando lo establecido en el artículo 10 de la ley 23.928 de convertibilidad.

Es una paradoja que la Ley de Convertibilidad fuera respetada casi hasta la obsesión en lo que fue el ordenamiento de la economía y no sucediera lo mismo en el caso de las tarifas de la mayoría de los servicios privatizados.

Desde mediados de la década de 1990 hasta diciembre de 2001, prácticamente todas las tarifas de los servicios públicos se incrementaron merced a cláusulas indexatorias incorporadas en los contratos con dudosa legalidad. Y digo "dudosa legalidad" porque se trató de decretos y resoluciones que, taxativamente, modificaron lo que imponía la Ley de Convertibilidad.

Mientras los precios de los bienes y los salarios se deflacionaron desde la segunda mitad de la década del 90 hasta diciembre de 2001, las tarifas se incrementaron entre un 10 y un 20 por ciento según los casos.

Entonces, en lo que hace al tema de las tarifas, cuestión que hoy aparece como una de las demandas más fuertes de las empresas, se puede concluir lo siguiente.

Se partió de tarifas iniciales altas que fueran significativamente rentables para las empresas.

Teóricamente, esas tarifas debían ser decrecientes en el tiempo –al transferirse a los usua-

rios y consumidores las mejoras de productividad de las empresas—, algo que no ocurrió por deficiencia del poder regulador del Estado.

Contradiendo en tercer término a la Ley de Convertibilidad, se incorporaron cláusulas indexatorias que incrementaron las tarifas muy por encima de los precios de los bienes transables y de los salarios.

Estos son aspectos que el Poder Ejecutivo nacional seguramente ha tenido —y seguirá teniendo— presente al momento de llevar adelante la renegociación de los respectivos contratos.

Pero hay otros aspectos que sintéticamente también quiero señalar, y que refuerzan esta reflexión respecto de los beneficios extraordinarios que las empresas de servicios privatizadas tuvieron hasta diciembre de 2001.

Las bases de licitaciones primero, y después los contratos y los marcos regulatorios, establecen que las empresas prestadoras pueden trasladar a las tarifas las variaciones de costos originadas en cambios tributarios.

Eso se hizo quizás para garantizar que cualquier cambio impositivo no afectara la ecuación económico-financiera de las empresas. Y se debía interpretar tanto para cuando hubiera incremento de impuestos como para cuando decrecieran.

Pero esto no fue así. En la década del 90 se eliminaron o redujeron impuestos que favorecieron a las empresas, y ello no se reflejó en una disminución de las tarifas.

Entre los impuestos que decrecieron o se eliminaron, recuerdo la derogación del impuesto a los sellos en los contratos y en las operaciones financieras, reducción a la mitad del impuesto a los activos, disminución de las cargas patronales a partir de 1994, excepción del gravamen arancelario a la importación de bienes de capital, etcétera.

Disminuyeron sensiblemente los montos a tributar por las empresas. Sin embargo, esto no se tradujo en una disminución de las tarifas, y el sacrificio fiscal fue en vano. Sólo benefició a las empresas, y para colmo, incidió en un aumento del déficit fiscal.

La pregunta es entonces ¿dónde quedó el concepto de tarifa de rentabilidad razonable que figura en la letra de los marcos regulatorios?

Difícilmente pueda encontrarse a algún sector económico con menor riesgo que el que tu-

vieron las empresas privatizadas en la Argentina hasta diciembre de 2001. Y sus utilidades fueron significativamente superiores al conjunto de las empresas líderes argentinas no ligadas a los procesos de privatización.

Acortaré mi discurso ya que me lo están pidiendo por señas. Pero quisiera decirles que la norma que estamos tratando es de fundamental importancia en el régimen de la emergencia pública y de reforma del régimen cambiario.

En la actualidad, nuestro país necesita entrar en un tiempo normal. Y respecto de los marcos regulatorios, es indispensable una ampliación de los plazos y un mayor control. Pero lo único que se permite es la revisión de la tarifa pauta-

da. Lo que pide esta ley es salir de los marcos regulatorios, respecto de lo cual estoy totalmente de acuerdo porque no hay posibilidad de renegociación, ya que en general fueron instrumentados por decreto.

A través de esta iniciativa, el Ejecutivo pretende dotar de un valor legal e institucional a los contratos a través de la limitación que se establece en el artículo 4º, que dispone que la comisión bicameral de seguimiento puede expedirse de manera positiva o negativa respecto de las transacciones.

El Poder Ejecutivo Nacional está pidiendo algo lógico, viable y que se expresa en los siete artículos. Cada una de las comisiones intervinientes se expidió por mayoría, pero también hay despacho de minoría.

Queremos sustentar el valor de este proyecto de ley que respeta al Congreso. Por nuestra parte, nos ponemos término para la decisión de la valoración de los dictámenes de las comisiones bicamerales de seguimiento.

Fundamentalmente, está lo que se signó como la “patria contratista” en el década del ’80 porque se pagaron, sin lugar a dudas, excesivos montos por los gastos improductivos de las empresas; y lo que se signó como la “patria concesionaria” en la década del ’90 por la alta rentabilidad de la “vaca atada” que tuvieron las empresas por las privatizaciones de los servicios públicos. Lo que hoy queremos, fundamentalmente, es una patria normal y justa para el presente decenio.

Pedimos que la valoración de esta ley tenga un tratamiento. Pedimos a cada uno de los se-

nadores que la vote. Así podremos dar este instrumento al Poder Ejecutivo Nacional dentro del marco del decreto 311. Ello implica la actuación de los ministerios de Economía y Planeamiento Federal en conjunto para que, junto a las comisiones bicamerales, puedan reunir lo requerido para cada uno de los contratos y mandar los marcos regulatorios que, seguramente se irán ordenando por ley. De esta manera, podremos entrar en la regulación de algo que es vital para la construcción de una Argentina normal, que implica previsibilidad institucional y de inversión, así como crecimiento en la producción y trabajo.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el senador Baglini.

Sr. Maestro. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Gioja). – El senador Maestro le solicita una interrupción.

Sr. Baglini. – Cómo no.

66

LICENCIA DEL SEÑOR SENADOR MORO

Sr. Presidente (Gioja). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Maestro.

Sr. Maestro. – Señor presidente: quería referirme a una breve cuestión que no tiene relación con lo que se está debatiendo. Previendo que quizás después de votar esta cuestión que estamos debatiendo nos quedemos sin quórum, quiero decir lo siguiente.

Es de público conocimiento que el senador Moro está afectado por una enfermedad, por lo cual ha pedido una licencia. El está preocupado. Me acaba de telefonar y quiere saber si el pedido de licencia ha ingresado y obra en Secretaría.

Sr. Secretario (Estrada). – Ya obra en Secretaría una nota del senador Moro solicitando una licencia por enfermedad por quince días.

Sr. Maestro. – Bien.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el senador Baglini.

Sr. Baglini. – Yo voy a proponer entonces, señor presidente, que la tratemos, porque conozco la inquietud del enfermo, que no es, seguramente, una buena ayuda para su mejoría.

Sr. Presidente (Gioja). – Si hay acuerdo, ponemos en consideración, entonces, el pedido de licencia por enfermedad con goce de dieta solicitado por el senador Moro.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Gioja). – En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). – Queda aprobada.

67

RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (Continuación)

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el señor senador Baglini.

Sr. Baglini. – Señor presidente: quiero iniciar mi exposición con una pregunta al miembro informante. ¿Hay alguna modificación al proyecto del Poder Ejecutivo?

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el senador Pardal.

Sr. Pardal. – No; no hay ninguna modificación.

Sr. Baglini. – Muy bien.

No quería “asesinar a un muerto”, señor presidente.

Yo voy a sumar los tiempos que me corresponden como informante del despacho de minoría, de mi bloque y el propio.

Este proyecto, que se trata curiosamente “en función de traspase”, no es un proyecto menor no sólo por su historia, porque esto es una de las demostraciones de algo a lo que me refería en la consideración de las leyes anteriores, que provocó algunas molestias del señor senador Cafiero.

Uno de los atributos clásicos de Dios es la ubicuidad teratológica. Esta palabra que suena a jerigonza, indica que Dios puede estar simultáneamente en todas partes al mismo tiempo. Es un atributo exclusivo de la divinidad. Uno de los atributos exclusivos del justicialismo es poder estar en distintas posiciones, en distintos tiempos. Esta es la mejor demostración de que están alcanzando el estrato de la ubicuidad teratológica, que solamente está reservado a la

divinidad, nada más que, en este caso, en distintas fases de tiempo.

Cuando lo escuchaba al senador Pardal pensaba en esta larga —que gracias a Dios va terminando— trayectoria que hemos tenido en el Congreso y en el famoso debate de la privatización de YPF con Nicolás Becerra, en ese entonces defendiendo por qué había que liquidar la petrolera estatal porque era la mejor oportunidad para fomentar las inversiones. Lo recordaba porque había que dictar una ley, que hoy estamos pulverizando y dejando aparte en un marco regulatorio eléctrico o gasífero.

Recordaba una larga intervención del ministro Dromi, que asistió a la Cámara de Diputados y habló dos horas y cuarenta y cinco minutos, hasta que empezó un partido de basquetbol de la selección argentina, y traía en la mano un decreto firmado por el presidente que levantaba en 3.500 millones de dólares, en un solo puchito, por supuesto que en papeles de la deuda, el precio de la privatización de Aerolíneas Argentinas y las empresas telefónicas.

Recordaba que apilábamos y apilábamos informes de la Auditoría General de la Nación, que a esta altura constituyen un libro, en el cual incluso se basan algunas de las ideas del Ejecutivo en dirección a la renegociación de los contratos, que parecían estar destinadas simplemente al olvido.

Recordaba que una de las primeras leyes del gobierno de De la Rúa, la de emergencia económica, tuvo un capítulo que quedó pulverizado y reducido a una parodia, que disponía la revisión en sesenta días solamente de algunas concesiones. Diría que estaba virtualmente confinado al área de Vialidad.

A partir de ahí casi quise que me invadiera la amnesia antes que de Antígona pasemos a Helena de Troya y se desencadenen algunas de las guerras del Peloponeso. Efectivamente, las mujeres tienen una gran intervención en la historia de la humanidad. Plutón, Zeus y Neptuno, que eran tres hermanos —los dioses del cielo, del Averno y de los mares— llegaron al borde de pelearse y hacer desaparecer a la humanidad cuando a Plutón se le ocurrió raptar a una de las mujeres en las cuales justamente Zeus había posado sus ojos. Se sabe que Zeus era de un apetito sexual interminable.

Pero no estamos para la mitología sino para revisar brevemente la historia que conduce a este proyecto y el porqué de este proyecto. Es una de las más gigantescas curiosidades.

Este es un proyecto con el cual el Poder Ejecutivo, siguiendo la línea del discurso de asunción del presidente Kirchner, pretende reestructurar los convenios, los contratos, las concesiones de las empresas de servicios públicos, para defender a los consumidores. Confieso que es la primera vez en la vida que como miembro de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía, que tienen intervención en estos temas, no he recibido una sola nota, una sola queja, un solo informe en el que diga que hay una sola empresa privatizada que se queje del procedimiento. Curiosamente, los únicos que han manifestado sus voces de alarma son el diputado Polino, por teléfono y por escrito, y asociaciones de consumidores.

Entonces, tengo algunas dudas en cuanto a si la herramienta va a servir para lo que se pretende que sirva. Y esas dudas —apenas conocido el proyecto del Poder Ejecutivo— las hicimos presentes con la mayor lealtad, por escrito, al presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y miembro informante, se las hicimos conocer al arquitecto De Vido y las aumentamos —ya con consideraciones en particular— en el dictamen de minoría que hemos suscrito.

Ahora bien, pocas dudas hay en la Argentina de que las privatizadas han tenido una conducta poco menos que catastrófica. Aclaro que no quiero hacer una sobrecarga de tintas respecto del doctor Menem ni su gobierno. Pero si adoptamos definiciones muy rápidas, podemos decir que se trató de privatizaciones hechas a mansalva, sin control y sin previsión. En la mayor parte de los casos, los servicios públicos pasaron a manos privadas sin la generación previa de un marco regulatorio por ley y, en algunos casos, a precio vil.

En este sentido, son altamente conocidos los negocios extraordinarios que se hicieron en las privatizaciones —en algunos casos en términos de días— con relación a los precios de las acciones de las empresas telefónicas o respecto de lo que fue la resultante de la privatización de la petrolera estatal. Es más, se hicieron en condiciones tan favorables para las empresas, que hubo

licitaciones que –vale recordarlo– se calificaron durante mucho tiempo de poco transparentes.

En consecuencia, el desarrollo de este proceso fue con significativo defecto de origen; los que se mantuvieron ocultos bajo la alfombra de la estabilidad mucho más que de la convertibilidad –como se ha dicho aquí– y de la ostensible mejora en la calidad de los servicios, contrastada ésta con la fortísima ineficiencia de los administradores estatales de las etapas previas.

Luego dé más de diez años –voy a citar algunos ejemplos y pediré la inserción de otros en el Diario de Sesiones– se pueden reconocer denominadores comunes con relación a los servicios públicos privatizados.

Así, las tarifas se dolarizaron, se aplicaron mecanismos de indexación tarifaria –a pesar de una prohibición explícita de la Ley de Convertibilidad–, y los entes reguladores manifestaron una debilidad extraordinaria, ya que la mayoría de ellos estaban creados por decreto.

Recuerdo muy claramente la discusión que tuvimos durante el dictado del marco regulatorio eléctrico, oportunidad en la cual había hecho su aparición en los Estados Unidos una doctrina que luego se vio aplicada en la Argentina, que era la captura del órgano regulador. Dicha captura se produjo a instancias del propio Poder Ejecutivo cuando cometió estropicios como los de las designaciones de los primeros directorios de los entes reguladores.

Ahora bien, hay una comisión institucional –que todavía no logramos poner en funcionamiento–, integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto, de Finanzas, de Energía y de Obras Públicas de ambas Cámaras, que tiene intervención, que por supuesto no es obligatoria, en el nombramiento y remoción de los miembros de esos órganos reguladores.

En las designaciones del primer directorio que tuvimos que considerar, el expediente del concurso estaba ostensiblemente alterado con triple foliatura. Habían sido eliminadas hojas que indicaban que quien resultó en ese momento primer presidente del organismo de regulación de gas, en su última actividad había sido justamente presidente de una empresa que había resultado adjudicataria de una de las áreas del sur del país.

Eso motivó que algunos recurriéramos a la Justicia, la que en primera instancia y en la Cá-

mara Contencioso Administrativa fallara a favor y luego, *per saltum* mediante, la Corte Suprema allanara el procedimiento.

Se dieron estropicios tales como que en los entes reguladores eléctricos –que tienen cinco miembros, dos de los cuales, según una propuesta del Congreso, debían ser designados por el Consejo Federal Eléctrico– el Ministerio de Economía llamara a un concurso para cubrir cinco cargos y nombrara a tres, en representación del Poder Ejecutivo nacional, diciéndole al Consejo Federal Eléctrico: “Estos son los que ustedes tienen que nombrar”. Todos aquellos que alguna vez han tenido que ver con ese Consejo Federal saben que lo que digo es una verdad absoluta. Es así que conclusiones como las emitidas por FLACSO no extrañan.

Voy a incorporar aquí un artículo aparecido en agosto de este año en el diario “Le Monde Diplomatique” llamado “Los fabulosos negocios de las privatizadas”. Allí se citan ejemplos truculentos tales como que en 1993 la utilidad y dividendos de las empresas representaban el 21 por ciento del total de la utilidad y dividendos. A fines de la década pasada daban cuenta del 65 por ciento. Entre 1991 y 1999 las obligaciones externas de las empresas privatizadas se multiplicaron por diez; pasaron de 4.128 millones de dólares a 42.710 millones de dólares. En 1993 los intereses pagados por las privatizadas representaron un 27 por ciento del total de intereses de la balanza de pago. A fines de la década representaban ya el 41 por ciento.

En 2000, Repsol registró en España un margen de rentabilidad sobre ventas del 5,3 por ciento; mientras que en la Argentina –la subsidiaria– registraba una ganancia del 14,2 por ciento. Recuerdo que una vez, en una de sus expresiones, el senador Terragno dijo que las subsidiarias aquí ganaban más que las casas matrices. Si la Shell hubiera tenido esa oportunidad hubiera ganado más que lo que gana una empresa multinacional en el mundo.

Quiero comentar ahora un ejemplo paradigmático –que pido se agregue–, referido a Aguas Argentinas, que al igual que todas las demás empresas pretende una adecuación tarifaria, a pesar de exhibir un crecimiento en los activos desde que tomó posesión; y que no fueron, exclusivamente producidos por un gerenciamiento eficaz del negocio.

Al respecto, las inversiones se financiaron con la toma de créditos a organismos externos a un costo bajísimo con seguro de cambio de la Ley de Convertibilidad. El cuadro en mayor medida se vio agravado con la falta de contratación de todo tipo de seguro frente a una eventual variación cambiaria, lo que más agravó los riesgos de la empresa.

El índice de endeudamiento ha ido subiendo año tras año superándose lo prometido en la oferta. Entre 1994 y 2001 —un período de siete años— los ingresos se incrementaron en un 95 por ciento, mientras que los empleados de la compañía disminuyeron de 7.444 al inicio de la concesión a 3.720 a fines de 2001.

La política de financiamiento que emprendió la compañía, referida a utilizar capitales de terceros a un costo menor a la rentabilidad del capital invertido, le permitió duplicar la rentabilidad de las empresas del mismo sector en cualquier país desarrollado. A lo largo de la concesión, la factura residencial exhibe aumentos de alrededor del 62 por ciento, siendo una estructura tarifaria altamente regresiva.

Tengo en mi poder una impresión efectuada por el J. P. Morgan —conocido como un banco de inversión—, que tiene una publicación virtualmente diaria. En este caso es la del 13 de agosto de 2003, con una nota titulada “Mercados emergentes al día”, en donde se cita cómo fue la primera mitad del balance 2003 de la empresa Telecom; y da realmente datos impresionantes. Ya no estamos hablando de los años de la convertibilidad ni de los años de fuego sino de 2003.

Dice que las principales expensas operativas fueron controladas con continuo decrecimiento en el número de la nómina —se refiere a la nómina salarial—; menos 1.138 empleados y con la reducción de cuentas incobrables.

No obstante este mecanismo de ahorro de costos, el informe dice lo siguiente: los gastos de capital —léase en castellano lo que invierte la empresa— se mantienen en mínimos niveles de mantenimiento, a razón de 34 millones, versus 189 millones del año pasado.

Ahora voy a decir la cifra, despacito: el *cash on hand* —o sea, el dinero en la mano, de la empresa—, permanece al final del primer cuatrimestre en 1.357 millones de pesos, esto es, en 485 millones de dólares. Esto significa —traduci-

do al castellano— que han reducido los costos y que no invierten, más allá del mínimo nivel de mantenimiento, pese a que tienen 1.357 millones de pesos —485 millones de dólares— *on hand*, es decir, en la mano, como dicen los ingleses.

Esta es la realidad de las empresas privatizadas. Nadie lo duda. Hay estudios de FLACSO al respecto.

Por eso, pido la inserción en el Diario de Sesiones de un artículo muy interesante de Martina Vélez que se llama “Proceso de Privatizaciones en la Argentina de los 90: reforma estructural o consolidación económica”, y de un artículo de la revista “Escenarios Alternativos”, escrito por Jorge Presman, que se titula “La larga marcha hacia el ajuste tarifario”. Este es un tema del cual tenemos que hablar hoy.

En primer término, creo que está absolutamente claro —y así debe quedar— que el proyecto que estamos considerando no nace de un repollo. Se trata de un proceso de renegociación abierto en la ley 25.561, de emergencia pública, sucedánea a la caída del gobierno del doctor De la Rúa y a la asunción del doctor Duhalde, que contuvo una autorización amplísima con relación a todos los contratos públicos celebrados bajo las normas del derecho público.

En ese sentido, tengo que volver a recordar que en la norma de emergencia sancionada durante el gobierno de la Alianza se excluyeron expresamente, por resistencia de la oposición, los contratos de servicios públicos de la posibilidad de una renegociación.

Entonces, lo primero que hay que recordar es que el proceso de reestructuración arranca a comienzos de 2002 cuando se encomienda al Ministerio de Economía que eleve las propuestas respectivas al Poder Ejecutivo en el plazo de ciento veinte días. No obstante, dicho plazo nunca se cumplió; de hecho, fue prorrogado en dos oportunidades: primero por decreto y, luego, directamente por una simple resolución.

También hay que recordar que el responsable interno de la comisión de renegociación fue cambiado cuatro veces y que el Congreso fue medianamente informado de esta situación hasta agosto. Y digo esto porque hay una comisión de seguimiento de estas facultades que preveía incluso la participación de los usuarios. Sin embargo, estos tuvieron que ir a la Justicia para que se les concediera participación y a partir de

ese minuto, se interrumpió el suministro de información del proceso de renegociación.

Pero ahora viene el Poder Ejecutivo a solicitar esta sanción. La discusión previa del proyecto en comisión puede haber durado —y voy a ser generoso— dos o tres horas. Y no sabemos qué ha hecho el Poder Ejecutivo con la autorización de este Congreso durante 2002. Sin embargo, no se viene a pedir que se prorrogue el término para renegociar los contratos, cosa con la cual no habría ningún inconveniente, sino que se viene a ampliar el término de renegociación de los contratos y las facultades delegadas a un límite que en este proyecto original es absolutamente insostenible.

Las normas previas que se han ido dictando durante este procedimiento debían haber alertado a este Congreso de que no era posible conceder un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Si uno ve la normativa asociada a la ley 25.561 puede sacar una conclusión central: hubo más preocupación —para no decir discusión interna, porque no quisiera meterme en aspectos que son privativos de lo que pasa dentro del Poder Ejecutivo— sobre quién y cómo que sobre qué es lo que se iba a renegociar.

Pruebas al canto: ley 25.561, de emergencia pública; decreto 311 del Poder Ejecutivo nacional estableciendo algunas normas de procedimiento; decreto 293/02, que encomienda al Ministerio de Economía la misión de llevar a cabo el proceso de renegociación y crea la comisión de renegociación de contratos y obras de servicios públicos; decreto 1834 —los estoy citando en el orden que están aquí—, por el que se adoptan medidas de determinadas contingencias económicas o procesos judiciales que afectan a las empresas concesionarias o licenciatarias de servicios públicos comprendidas en los procesos de renegociación de la ley 25.561; decreto 370/02, por el que se establece que la comisión de renegociación será presidida por el Ministerio de Economía designándose como vicepresidente el secretario legal y administrativo del ministerio, integración de la comisión, representación de la asociación y usuarios; decreto 1.090/02, por el que se establecen los alcances del proceso de renegociación con relación a los eventuales reclamos que pudieran llegar a plantearse entre concesionarios y concedentes; decreto 1.534/02 —aquí sí que hay una perla—, por el que

se dispone la renegociación del contrato de concesión celebrado entre el Correo y el Estado nacional, a fin de permitir su readecuación económica y se constituye una comisión negociadora; decreto 1.535/02 —otra perla— por el que se constituye una comisión a los efectos de llevar a cabo la renegociación del contrato de concesión con el consorcio Aeropuertos Argentinos 2000 S.A. e integración de la comisión; decreto 1.839/02, por el que se extiende el plazo para que el Ministerio de Economía eleve al Poder Ejecutivo la propuesta de renegociación; decreto 1.283/03 por el que se unifican los ministerios de Economía y de la Producción en una sola cartera de Estado y se crea el Ministerio de Planificación Federal, de Inversión Pública y Servicios; decreto 27/03, por el que se aprueba el organigrama de aplicación de la administración centralizada de la jurisdicción.

Estoy leyendo nada más que las normas que están citadas en el mensaje del Poder Ejecutivo, porque si traigo la carpeta entera aplastamos al cuerpo con un farrago de cosas que nos llevan a esta conclusión.

Curiosamente, no ha habido ni siquiera una orientación definida del proceso de renegociación. En este sentido, hubo dos contratos, llegando uno de ellos al estado de renegociación virtualmente aprobada y que luego fuera detenido por la Justicia. En efecto, me refiero al caso del correo y al de aeropuertos; y vale la pena que nos detengamos cinco minutos en lo que son los informes de auditoría de los últimos dos o tres años sobre estos contratos, como para darse cuenta de por qué en el dictamen de minoría que hemos presentado ponemos expresamente cuáles son las áreas sujetas a renegociación, para que no aparezcan en el camino comisiones especiales de renegociación para determinados contratos.

¿Qué dice el proyecto originario del Poder Ejecutivo? Por ejemplo, dice que a un año y medio de la apertura del procedimiento de renegociación se pide una prórroga hasta 2004 para llevar a cabo la negociación de los contratos de servicios públicos, en un ámbito en el cual se borran los marcos regulatorios dictados por ley; y no hablamos de los fijados por decretos, porque como tal pueden ser modificados por el Poder Ejecutivo, sino que me refiero a los establecidos por ley.

Entonces, le hacía presente los otros días al doctor Quevedo Mendoza —que está acá acompañándonos en esta noche— ¿qué significa esto de que vamos a levantar los marcos regulatorios del artículo 2º? ¿Significa, por ejemplo en materia eléctrica, que la generación, distribución y comercialización puede estar toda en una sola mano y, además, chilena, sin hacer nacionalismo a ultranza ni ninguna otra cosa? ¿Significa que se pueden limpiar las normas que hay aquí adentro de esto, que no tienen nada que ver con la fijación de tarifas sino que, por ejemplo, están vinculadas con la protección ambiental o la participación de las provincias en el organismo regulador?

Desde luego que nos han dicho que no, pero con la redacción que está aquí, que quedan levantados los marcos regulatorios.... ¿Por qué los marcos regulatorios por ley quedan levantados? ¿Cuál es el problema? Si el problema se refiere estrictamente a las facultades para renegociar las tarifas, entonces, digamos que queremos las manos libres para renegociar las tarifas. Pero no hagamos fusilamientos a pie firme de funcionarios que por ahí van a algún coloquio empresario y cometen el error de decir lo que todos pensamos que es lo que va a pasar. Porque este proyecto introduce la posibilidad de reformar las tarifas sin modificar ningún otro aspecto de los contratos; y éste es un tema central.

¿Qué dijo el presidente Kirchner con respecto de esto? ¿Qué dijo el ministro de Obras Públicas? Dijo que claramente...

— Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (López Arias). — Senador Pichetto: quiero hacerle una aclaración. Como miembro informante el senador Baglini tiene cuarenta minutos y no veinte para exponer. Y lleva exactamente veintidós minutos. O sea que tiene un tiempo más todavía.

Sr. Baglini. — Bueno, muy bien.

¿Qué dice el itinerario que se había señalado por el ministro y por el presidente? Vamos a analizar todo el contrato; vamos a ver cómo se hicieron las inversiones; vamos a ver cómo se manejó la actualización de tarifas; vamos a ver cómo se han cumplido las obligaciones de calidad; y vamos a ver cómo está esto frente a la sanciones de los organismos reguladores. Al respecto, por si ustedes no lo saben, hay 89 millones

de pesos en sanciones —que antes eran dólares y no en pesos devaluados— aplicadas nada más que a las empresas eléctricas en la Argentina por parte de los organismos reguladores.

Entonces, recién al final de este túnel vamos a tener una ecuación que me va a permitir saber si las tarifas tienen que subir o tienen que bajar, porque es posible que con estas conclusiones deban bajar.

Por lo tanto, si éste es el objetivo y el procedimiento y el Poder Ejecutivo, según el artículo 2º del proyecto, puede renegociar sin limitaciones ni bajo las condiciones establecidas en los marcos regulatorios, ¿para qué los organismos reguladores están reducidos nada más que a organismos de asesoramiento técnico? ¿Para qué existe en el artículo 3º la innovación —y digo innovación como ley, porque en realidad ya está en un decreto, pero como decreto es una cosa y como ley es otra— de la introducción de la figura de la enmienda transitoria del contrato público?

Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo en un contrato de servicios públicos puede decidir modificar un aspecto parcial del convenio —por ejemplo la cuestión tarifaria— antes de llegar a una conclusión definitiva del contrato, con lo cual deja fuera de la discusión al Parlamento sobre este problema, porque lo que tiene que venir al Congreso, según este proyecto que no tiene ninguna modificación, es el acuerdo final y no el transitorio. En efecto, el acuerdo transitorio está fuera del rol del Congreso en la renegociación.

Señor presidente: ¿para qué quiere el Poder Ejecutivo esta ley? ¿Simplemente para prorrogar el plazo de la renegociación o para tener una nueva herramienta legislativa que le permita tomar decisiones en materia tarifaria?

Quiero recordar que ya tuvimos un experimento de una enmienda transitoria de los contratos de los servicios públicos. Ahora voy a usar como ejemplo a dos personajes: un ministro de Economía de un país extranjero y un ministro de Economía de la Nación Argentina, en distintas etapas del tiempo y en diarios de cuya autenticidad no pueda dudarse. Estos acuerdos transitorios son los que le permitieron al ministro de Economía Lavagna intentar en noviembre pasado un aumento tarifario del 9 por ciento en gas y en electricidad, que fue detenido por la Justicia por no cumplir los parámetros de la ley

de emergencia 25.561. Si nosotros tomamos los parámetros de esa ley nos van a dar ganas de llorar, porque no es que le imponga al Poder Ejecutivo cosas que son cortapisas terminantes con absoluta definición, sino que le da parámetros de una laxitud tan descomunal que, precisamente, la Justicia paró porque uno de esos parámetros dice que, de alguna manera, tiene que existir una tarifa social, en un lenguaje que hay que descryptar.

Entonces, vamos a pasar a ver rápidamente una película: 25 de noviembre de 2002. Aquí tengo en mi poder "La Voz del Interior", un diario sospechado de radical, y también tengo "Terra", que pertenece al grupo Clarín y que no podrá ser sospechado de falta de objetividad con el gobierno. En ambos casos las dos noticias son iguales: Una dice "Respaldo de Francia a las últimas medidas", y la otra dice "Francia elogió a Lavagna por la apertura del corralito". Voy a leer sólo algunos párrafos. Dicen así: "El ministro de Economía, Roberto Lavagna, logró este lunes tranquilizar a su par de Francia, Francis Mer, al presentarle el ajuste de tarifas y la resolución del corralito". Esto es lo que decía "Terra". La nota de la "Voz del Interior" es un poco más completa: "El ministro de Economía se reunió hoy con su colega francés Francis Mer que reaccionó positivamente a la decisión de Argentina de levantar el corralito y aumentar las tarifas de algunos servicios públicos. Las negociaciones de Argentina con el Fondo y la situación de las empresas francesas implantadas en el país fueron los asuntos principales. El ministro señaló que las medidas anunciadas por el gobierno argentino la semana pasada, como el levantamiento del corralito y el aumento de las tarifas eléctrica y de gas van en buena dirección. Mer, que tomó nota con satisfacción de las medidas anunciadas, tratará el asunto de la Argentina mañana, martes, con su colega español Rodrigo Rato en la cumbre hispano-francesa de Málaga. También abordará con su colega alemán Hans Eichel, en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas europeos de comienzos de diciembre, con el fin de acelerar la reanudación de negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario. Francia es el tercer inversor de la Argentina, después de los Estados Unidos y España. En la pasada década las empresas galas invirtieron más de diez mil millones de dólares en la Argentina. El aumento

del 9 por ciento nos parece adaptado a la situación (dijo el ministro de Economía de la Argentina a la prensa antes de emprender el viaje). Explicó que de los 59 contratos no hay ningún caso de una sociedad que no cubra sus costos operativos, aunque admitió (les pido que recordemos esta frase para la última parte de la historia) que es cierto que no cubren la amortización de sus inversiones".

La película avanza algunos cuadros y llegamos al día 25 de julio de 2003, que no fue hace un siglo sino hace menos de un mes. Ahora vamos a tomar "El Diario" de Río Negro, que está sospechado de radical, y también vamos a volver a "Terra". En "El Diario" de Río Negro, sospechado de radical, el canceller Bielsa —aquí aparece un tercer personaje— advirtió desde Washington a las empresas a cargo de servicios públicos que deben dejar de reclamar aumentos de tarifas y las convocó a sentarse maduramente a discutir la totalidad de las variables contractuales de las concesiones. Por lo tanto, estimó que la actitud razonable no es repetir "tarifas, tarifas, tarifas", sino maduramente sentarse en una mesa a discutir la totalidad de las variables contractuales. El ministro de Planificación ya abrió la polémica al sugerir a Mer que ni venga a la Argentina...

Sr. Pichetto. — Pido una interrupción.

Sr. Presidente (López Arias). — El señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Baglini. — Cuando termine de leer esta noticia, se la concederé con todo gusto.

Decía que el ministro de Planificación abrió la polémica al sugerir a Mer que ni venga a la Argentina si su interés central es el reclamo de un aumento de tarifas para las empresas de servicios públicos, donde Francia tiene inversiones en electricidad, telecomunicaciones y agua potable.

El 25 de julio de 2003 aparece la siguiente nota en "Terra": "Francia pidió una solución razonable y responsable al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos". "En este caso, las empresas son más importantes que los Estados", puntualizó Mer al respecto. "Cabe recordar que las tarifas públicas permanecen congeladas desde que el ex presidente Duhalde decretara la devaluación de la moneda en enero de 2002 y restó importancia el funcionario

francés al desencuentro entre el presidente argentino y los empresarios franceses aludiendo que se trató de un error de agenda.

“Durante su visita, iniciada el jueves, la delegación francesa, compuesta por Mer, el embajador galo en Buenos Aires y varios legisladores franceses, se reunió con representantes de veinte empresas privatizadas, el presidente Kirchner, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ministro Lavagna”.

Diario “La Nación”, 26 de julio de 2003, reportaje exclusivo al ministro Francis Mer. Dice así: “¿Cómo fue la reunión con De Vido? Fue una reunión interesante que nos permitió poner los relojes en hora.

“¿Qué opina de que el gobierno de Kirchner haya fijado un plazo de dieciocho meses para negociar con los servicios? No es parte de la discusión la impresión de que haya que esperar dieciocho meses para llegar a un resultado. Hay sesenta empresas y en la medida que el tiempo pase algunos problemas irán resolviéndose. Quizás, el último se resuelva dentro de dieciocho meses (*sonrisas*), pero habrá otros antes porque la Argentina necesita lo más rápido posible reactivación de las inversiones, incluso de estas empresas.”

Esa semana del 25 de julio, si lo recuerda, el presidente de la Nación se entrevistó en Washington con el presidente Bush. Al día siguiente de la entrevista con Bush, que no voy a leer porque es muy corta y no tiene nada interesante, “el gobierno de Francia (dice el diario “Clarín”) comprometió su apoyo a las negociaciones que encarará la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que reclamó a cambio a las autoridades que aceleren las renegociaciones con las empresas privatizadas para recrear cuanto antes reglas de juego transparentes, claras y continuas. No vine a buscar garantías del gobierno sino un compromiso que dé lugar a las medidas tendientes a restablecer un marco de reglas transparentes y estables que permitan ampliar las posibilidades de negocios de las empresas francesas que invirtieron en el país”.

“Ninguna compañía francesa tiene previsto abandonar su posición en la Argentina.” Y ahora viene una frase que se relaciona con la que les pedí que recordaran y que pertenecía al ministro Lavagna. La frase de Mer dice: “Las compañías no pueden seguir invirtiendo si no reci-

ben una solución rápida, razonable y responsable”. El artículo continúa diciendo: “Lavagna les reiteró el compromiso oficial de readecuar los contratos bajo tres principios clave: el derecho del inversor a recibir utilidades, la financiación de las inversiones con parte de esas utilidades y prestación de un servicio eficiente acorde con la capacidad de pago de los usuarios”.

Luego hay una interesante descripción en el diario “Clarín” de cómo se abrió la reunión, cómo se discutió sobre la necesidad de recomposición tarifaria y cómo Mer le preguntó al ministro De Vido de qué tiempo se hablaba. En ese sentido, De Vido respondió que no se podía precisar un tiempo, aunque el trabajo conjunto de la comisión apuntaba a redefinir los contratos lo más rápido posible.

Al día siguiente, el artículo de Marcelo Bonelli alude a que el Fondo había cometido una gravísima infidelidad al difundir documentos firmados nada menos que por John Dodsworth, conocido en nuestro país, en los que se decía que la Argentina ha decepcionado al organismo por su falta de decisión a la hora de hacer reformas estructurales y, textualmente, indica que “...en el plan pretenden incluirse un paquete de fuertes y profundas reformas estructurales, entre los que se encuentran temas que hasta ahora no abordó Economía: un aumento del superávit fiscal creciente para los próximos tres años que garantice la salida del *default*, reforma financiera y de la banca estatal, plan consistente para salir del *default*, nueva ley de coparticipación federal, reforma tributaria y programa para recomponer las tarifas”.

Fin de la película: comunicado de prensa oficial del Fondo del día 28 de julio de 2003, publicado en su página web y dado a conocer al mundo. Dice: “El Fondo completa la tercera revisión del *stand by* de Argentina y aprueba 1,5 billones de desembolso...”

Sr. Pichetto. – ¡Está agotado el tiempo!

Sr. Presidente (López Arias). – Es la Presidencia la que controla el tiempo.

Sr. Baglini. – Usé el tiempo del miembro informante. Ahora usaré el correspondiente al del bloque.

Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en el uso de la palabra...

Sr. Baglini. – “El trabajo del nuevo gobierno en la reforma estructural necesita ser acelera-

do en el período que viene. El crecimiento sustantivo en el mediano término requiere....

Sr. Presidente (López Arias). – Senador Baglini: la senadora Fernández de Kirchner le pide una interrupción...

Sr. Baglini. – Con todo gusto se la concedo, pero cuando termine de leer esto.

“...requiere la consistente implementación de un comprensivo programa de reformas estructurales dirigido a la reestructuración bancaria para restablecer la intermediación financiera, a la reforma tributaria y de las relaciones intergubernamentales para alcanzar finanzas públicas sustentables, a un marco para el ajuste de la tarifa de los servicios, y los problemas de pobreza y sociales, entre ellos seguridad jurídica y respeto a los derechos de los creadores”.

Ahora sí le concedo la interrupción a la señora senadora.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: quiero formularle una pregunta más que al senador Baglini, al señor presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical.

¿Realmente, hay voluntad de tratar el tema en el día de hoy? Dado el tenor del discurso del senador que está haciendo uso de la palabra, el número de senadores del bloque radical sentado en sus bancas y las horas que hemos estado discutiendo el proyecto anterior, sería bueno que no hagamos un ejercicio de diletantismo. Además, la lectura de los periódicos... Recuerdo que el senador Maglietti leía mejor que Baglini; me gustaba más. Pero no me parece que sea serio cuando estamos discutiendo un proyecto de ley, que se lean los diarios y que no se hable de la norma en sí misma.

Podemos estar de acuerdo o no, votarlo o no, cada uno hará lo que mejor le parezca. Pero hablemos del proyecto y de la normativa en sí misma, y no que nos brinde informaciones que son de público y notorio: todos las hemos leído, más allá de que sean verdad o no.

Simplemente, lo que quiero preguntar es si realmente hay intención de tratar este proyecto.

Sr. Presidente (López Arias). – Hay dos pedidos de interrupción.

Esta Presidencia quiere aclarar –porque no quiero problemas después– que al senador Baglini le quedan tres minutos de su tiempo...

Sr. Baglini. – De mi primer tiempo, que es como informante del despacho de minoría. Ahora voy a hablar por el bloque y luego lo haré con mi tiempo individual.

Sr. Presidente (López Arias). – ¡Señor senador Baglini, creo que eso no es serio!

Sr. Baglini. – Señor presidente: se ha decidido que hable un solo miembro por bloque, y estoy acumulando los tiempos.

Sr. Presidente (López Arias). – No es ético.

Sr. Baglini. – Ahora bien, si hay senadores que están parados y divirtiéndose mientras estamos hablando de cosas que son serias, es otra cosa...

Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Baglini, creo que no es serio.

Escucharemos a los señores senadores Pichetto y Maestro, respectivamente, a ver si ordenamos un poco el debate.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido a todos los senadores de mi bloque que se sienten, ya que vamos a tratar este tema hasta la hora que sea. En muchas oportunidades en la Cámara de Diputados nos hemos ido a las ocho de la mañana. Así que este Senado va a tener que hacer un esfuerzo algún día y quedarse hasta la mañana.

Cuando se rompen las reglas, uno se molesta porque hay comportamientos que hacen a la actitud ética y al compromiso que asumen los bloques. Indudablemente, hoy el senador Baglini está en una noche muy especial, muy particular. Todo le ha salido mal, y está decidido a prolongar su tiempo. Pero lo vamos a escuchar, no le vamos a dar el gusto. Queremos votar esta iniciativa porque es importante para el país, a los efectos de que pueda contar las herramientas para revisar los contratos. Por lo tanto, vamos a escuchar al senador Baglini.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Maestro.

Sr. Maestro. – Señor presidente: entiendo que la exposición del senador Baglini es absolutamente seria, respetuosa y con profusa documentación e información. Además, está usando el tiempo reglamentario.

El tema en consideración no es menor, sino que es muy serio y hace a los intereses del país.

Para tranquilidad de la senadora por Santa Cruz, quiero decirle que los senadores de mi bloque que permanecen en el recinto lo van a seguir haciendo. O sea que le doy la seguridad de que se llegará a la votación y se podrá encontrar una definición a este tema. No nos desdecimos del compromiso que hemos tomado, en el sentido de que no íbamos a impedir el tratamiento de esta cuestión, que la íbamos a habilitar —tal como lo hemos hecho— y que manteníamos el quórum hasta agotar el tema.

Sr. Presidente (López Arias). — Esta Presidencia debe advertir realmente que vamos a respetar el uso de la palabra de los señores senadores. Pero no parece serio acordar que va a hablar un orador por bloque y que después se produzcan estos desdoblamientos de personalidad, lo cual realmente no ayudan al desarrollo de la sesión.

Continúe, senador Baglini.

Sr. Baglini. — Señor presidente: primero, quiero aclarar al señor presidente del bloque Justicialista que nada me ha salido mal. Escuchando al miembro informante yo diría que a quien le ha salido mal es al país por como hemos manejado el tema de los contratos de privatizaciones y, mucho más, el de las tarifas. De manera que lo que estoy diciendo aquí no es una pavada, aunque sean las 2 y 59 de la mañana.

Digo que no es una pavada porque me he preocupado de hacérselo conocer al ministro y al presidente de la comisión antes de que empezáramos a tratar el tema, todo por escrito; sin el ocultamiento de una sola coma de lo que pensábamos respecto del proyecto y de cómo podía mejorarse. Es más; nuestro dictamen —ahora voy a entrar en su consideración— contiene todas las herramientas que el Poder Ejecutivo necesita para la renegociación.

En primer lugar, dispone la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2004 para renegociar, pese a que no ha habido suficiente información de qué se ha hecho hasta ahora; pese a que en la página web del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos consta que de las tres fases en que se dividió la renegociación con la ley 25.561, hay contratos que están en la tercera fase. Se trata, pues, de contratos que para ser reestructurados no necesitarían de ninguna ma-

nera el tiempo que se está pidiendo hasta el final del período. Por eso, señor presidente, nuestro proyecto pone dos tramos: uno, hasta el 30 de junio de 2004, para los que se encuentran en determinada situación, que están aquí identificados. Tienen todos los sectores que la renegociación abarca identificados uno por uno para evitar, precisamente, que se creen comisiones especiales que lo único en que terminan es en altísimo conflicto, dentro de la administración pública, con los órganos de control y con el propio Congreso.

En segundo lugar, dice que si el cronograma le resulta insuficiente, aun así, puede solicitar autorización al Congreso treinta días antes del vencimiento de cada tramo para que se alargue, informando junto con el pedido de prórroga. Además, mensualmente debe informar el grado de avance de la renegociación al Congreso.

Dice el proyecto que durante el proceso de renegociación autorizado por la ley de emergencia el Ejecutivo se abocará a la competencia de los organismos reguladores. Aquí la diferencia es sustancial: nosotros no levantamos los marcos reguladores por ley, porque eso es una puerta abierta para hacer cualquier cosa. De hecho, está claro en el propio informe del ministro De Vido, que acompañó diez puntos de los temas que podrían entrar en la negociación, que aquí se puede hacer un refrito fenomenal con cada uno de los puntos que no sabemos a dónde vamos a terminar. Por eso dejamos los marcos regulatorios por ley; con los de decreto, el Ejecutivo hará lo que quiera: para esto están por decreto, desgraciadamente; deberían estar todos por ley.

En los organismos reguladores sí puede el Ejecutivo ejercer las facultades del organismo regulador en materia de revisión contractual, ajuste y adecuaciones tarifarias exclusivamente. Es decir que de las atribuciones de los organismos reguladores toma lo que es específicamente tarifario, para que no diga que va a haber una interferencia del organismo regulador imponiendo al Ejecutivo una tarifa desde afuera de su propia voluntad.

En el ejercicio de tales competencias, dice nuestro proyecto, tiene que observar lo que está en la ley 25.561, con las limitaciones de los dos marcos regulatorios por ley: la 24.065 y la 24.076 para el sector eléctrico y gasífero.

Nosotros también contemplamos los acuerdos parciales de renegociación, porque de lo contrario se nos diría que le estamos coartando al Poder Ejecutivo la posibilidad de llegar a un acuerdo parcial; pero lo hacemos con la siguiente diferencia. En el caso de enmiendas transitorias, tienen que ser consideradas dentro de los términos de los acuerdos definitivos. Cualquiera sea el alcance —aquí está la diferencia—, previo a la suscripción de los mismos, los ministros deben realizar audiencias públicas que posibiliten la participación ciudadana. Esto es para que no haya acuerdos parciales que justamente modifiquen solamente las tarifas sin control ni participación de los consumidores finales. Cumplido ello, los acuerdos deberán ser remitidos al Congreso, en cualquiera de sus formas, parciales o totales.

Dice incluso: siempre que no se haya arribado a un acuerdo definitivo, si el Poder Ejecutivo nacional consideraba necesario modificar el cuadro tarifario, debe previamente tomar en consideración los criterios del artículo 9º de la ley 25.561, que es el de la tarifa social. Asimismo, las decisiones que se adopten en esta materia deben resultar necesarias para garantizar a los usuarios continuidad, seguridad y calidad de las prestaciones, debiendo incluir segmentaciones tarifarias para determinadas categorías de usuarios. Tiene todo el margen que quiera, pero con parámetros fijados, con participación de los usuarios, con participación del Congreso, con control.

Nuestro proyecto se diferencia fundamentalmente en un tema. Le damos al Ejecutivo el *fast track*, como mal se ha dado en denominar, en términos ingleses, a lo que es una vía rápida. El Ejecutivo dijo: “Necesito una vía rápida de consideración. Sesenta días.”. Perfecto. *Fast track*, sí; aprobación ficta, no. Está prohibida por la Constitución expresamente.

Tengo aquí un dictamen (*exhibe un papel*) de la Comisión de Control de los Decretos de Necesidad y Urgencia, suscripto por la mayor parte de los miembros del bloque Justicialista entre ellos, la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que dice que no puede haber aprobación ficta de la ley ni tampoco de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Cómo vamos a decir ahora que si no se trata en sesenta días hay aprobación ficta de un con-

venio que tiene un valor para la comunidad y efectos sobre el Estado superiores a los de una ley?

Vía rápida, *fast track*, sí. Sanción ficta, no.

Hasta nos hemos preocupado de reiterar la disposición que dice que ninguna disposición de esta ley le autoriza a la empresa contratista o prestador de servicio público a suspender o alterar el cumplimiento de las prestaciones, y que la ley es de orden público. Para que nadie venga a decir que en el ejercicio de esta facultad, el Poder Ejecutivo se ve coartado en las negociaciones. Entonces, en el dictamen en minoría hemos dado extensísimos fundamentos en particular que indican por qué pretendemos que esto se haga seriamente, sin ningún coartamiento, sin ningún ocultamiento, con la mejor predisposición, con la mayor transparencia en esta discusión, sin dictámenes de escondidas y de trasnoche. Por eso, incluso, hemos enviado asesores al seno del Poder Ejecutivo para que se discuta, y hemos llegado a una conclusión que es diferente a este proyecto.

Cuando dicho proyecto llegó al Congreso se alzaron voces diciendo que era una barbaridad que de un plumazo se suprimieran los marcos regulatorios por ley. Pero esas voces no se alzaron desde los bloques opositores solamente. Se decía que era una barbaridad que hubiera sanción ficta de las leyes, que eso era inconstitucional; que era una barbaridad que quedaran levantadas todas las funciones de los organismos reguladores; que era una barbaridad que en las condiciones en que estaba no hubiera un solo parámetro para establecer los acuerdos parciales. Pero ahora se dice que esta herramienta es imprescindible, que sin la redacción actual el Poder Ejecutivo no puede hacer nada. No es así. El Poder Ejecutivo con la redacción del dictamen en minoría puede hacer absolutamente todo, en el marco del más prudente equilibrio entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, que tiene su área de administración, y las atribuciones del Congreso, que frente a los usuarios termina siendo siempre el responsable cuando las cosas no salen bien, cuando, en definitiva, cada uno de nosotros tiene que responder en la totalidad de la extensión del territorio nacional porque las empresas han cometido estos abusos de los que hemos dado cuenta con números muy claros y concretos.

Sr. Yoma. — Pido una interrupción.

Sr. Presidente (López Arias). — El señor senador Baglini terminó su intervención. Hay una lista de oradores. Están anotados las señoras senadores Fernández de Kirchner, Escudero, Sapag y Negre de Alonso. Si quiere anotarse, senador Yoma...

Sr. Yoma. — Es simplemente una interrupción.

Sr. Presidente (López Arias). — Está en uso de la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner. ¿Le concede la interrupción?

Sra. Fernández de Kirchner. — Sí, cómo no.

Sr. Yoma. — Simplemente quería mencionar algo referido a la sanción ficta, a la que bastante se refieren los senadores de la oposición.

En ninguna parte del proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados —de la iniciativa del Ejecutivo— se menciona la sanción ficta.

En este caso, la voluntad del Congreso seguramente se va a expresar por resolución conjunta de ambas Cámaras y no a través de una ley. De lo contrario, se sometería esa voluntad del Congreso al veto del Poder Ejecutivo; y éste no es el sentido que tiene el plazo de 60 días.

Por lo tanto, el artículo 81 de la Constitución Nacional, que prohíbe la sanción ficta, en el capítulo de formación y sanción de las leyes, nada tiene que ver con la propuesta del Poder Ejecutivo, en la cual la voluntad del Congreso de aprobar o no un convenio o un acuerdo es por resolución de ambas Cámaras y no por ley.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia informa que se acaban de anotar en la lista de oradores la señora senadora Avelín y el señor senador Morales.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: para cerrar la lista de oradores...

Sr. Presidente (López Arias). — La señora senadora Ibarra también será agregada a la lista de oradores.

Continúa un uso de la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. — Decía, señor presidente, que parte de uno de los problemas que hoy tenemos —el último que acaba de señalar el senador preopinante, sobre la interpretación de que esto significaría una sanción ficta— deriva de una primera cuestión formal que tuvo la Cámara. A mi criterio —si bien no

estuve presente en aquella sesión— el problema radicó en el no envío del examen a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya que se trata de facultades delegadas.

He escuchado hablar de constitucionalidad o no constitucionalidad y de sanción ficta. Ahora bien, que yo sepa, de acuerdo con el reglamento, estas cuestiones son facultad excluyente y exclusiva de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es más, señor presidente, toda la historia de las facultades delegadas siempre tuvo como cabecera a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

No fue el caso de la ley 25.561, que el senador Baglini aprobó con su voto y en la que me abstuve de votar precisamente porque se hizo en 48 horas. Ingresó un 5 de enero a la Cámara de Diputados —fin de semana— y el domingo fue aprobada en este recinto.

Allí, por el artículo 9º se aprobaba la renegociación de los contratos —con los cinco parámetros que fija dicho artículo— sin ningún tipo de intervención del Congreso. De hecho, se renegociaron contratos; por ejemplo el de los aeropuertos, que se renegóció y se aprobó por decreto sin ningún control del Parlamento.

Cuando uno escucha al senador Baglini tiene la sensación de que estamos tratando un proyecto remitido por el presidente Kirchner, donde ha decidido privatizar los servicios públicos en la República Argentina, como si la historia recién empezara. O bien se puede interpretar que el senador Baglini recién llega, que nunca tuvo que ver con nada y es un desconocido que desconoce todo lo que ha pasado en la Argentina desde la ley 23.696 a la fecha en materia de servicios públicos privatizados, y del rol que el Congreso tuvo en esa década a través de instrumentos legales dictados por el propio Parlamento.

Pero esto es así, porque el señor senador Baglini no solamente ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante la gestión del doctor De la Rúa —comisión fundamental y central en ambas Cámaras; no cualquiera es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y todos saben de qué estoy hablando— sino que, además, también es miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Ahora bien, ¿cuál era la historia de las privatizaciones en la Argentina y del control parla-

mentario? La ley 23.696 es el origen de la declaración en emergencia de todos los servicios públicos y por ella se habilita a todas las privatizaciones de la República Argentina. Por ella se crea una comisión que recibe el nombre de Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones y que constituye todo un tema en el Parlamento y en nuestro país.

El rol de la comisión era recibir toda la documentación –resoluciones, pliegos, licitaciones, etcétera– que a partir de la ley 23.696 habilitó al Poder Ejecutivo nacional a efectuar la privatización de la totalidad de los servicios públicos de la Nación.

Esa comisión tenía la misión de pronunciarse sobre todo lo que en materia de privatizaciones llegaba a su seno. Si uno mira la nómina de sus miembros –yo la recuerdo porque fui senadora durante la anterior etapa– sabrá que durante mucho tiempo detentó la presidencia el senador por Santa Fe, Jorge Massat, y que fue secretario entre 1989 y 1995 un senador que hoy es el actual gobernador por Salta, Juan Carlos Romero.

Otra de las misiones de esta Comisión era controlar y seguir la marcha de las privatizaciones.

Hace muchos años desde esta misma banca dije que desconocía qué pasó con esa comisión que era de seguimiento, pero que nunca encontró a nadie. Era esa comisión la que debía entender sobre la situación de los servicios públicos que fueron privatizados en nuestro país, sobre los incumplimientos de contratos y los aumentos tarifarios. En fin, alcanza con ver las 180 resoluciones que expidió.

Durante ocho años jamás dictó su propio reglamento. Entonces me pregunto, ¿cómo funcionaba? Lo hacía a través de una elección y no había ninguna obligación de tratar algún tema. En sí, el tratamiento era selectivo: se trataba tal tema o ninguno; se resolvía tal cosa o tal otra. Incluso, sus dictámenes no eran vinculantes, no se publicaban ni eran tratados en el plenario. Nunca en un plenario de la Cámara de Diputados o del Senado se trató un sólo tema que ingresara a esa comisión.

Recuerdo que una vez la Cámara de Diputados intentó considerar algo relacionado con un ramal ferroviario, pero se armó tal lío que nunca más nadie intentó hacer algo semejante.

Y las privatizaciones siguieron andando con modificaciones de pliegos, con o sin marcos regulatorios. Sólo por ley hubo dos marcos regulatorios: gas y electricidad; mientras que todo lo demás se hizo por decreto.

El señor senador Baglini dijo que nunca recibió una nota por parte de las empresas sobre esta iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo. Tampoco hemos visto ninguna actividad concreta para impedir o analizar las cosas que fueron hechas en nuestro país en materia de servicios públicos. Ahora bien, quiero decir que esta historia no comienza ahora. Nunca hubo control por parte del pleno del Parlamento y si lo hubo en esa comisión.

Inclusive, quiero recordar que cuando aquí se discutió la ley 25.561 y se creó una nueva comisión de seguimiento de esa ley de emergencia a iniciativa –si mal no recuerdo– de la entonces diputada Vilma Ibarra, se consiguió que lo que dictaminara esa comisión no quedara en el seno de ella, sino que fuera tratado por el pleno del cuerpo, como un reaseguro de publicidad –y de intervención de la totalidad del cuerpo–, evitando el manejo en comisiones cerradas.

¿Qué es lo que el Poder Ejecutivo actual, que todavía no ha cumplido tres meses de mandato, viene a proponer a este Parlamento que desde 1989 –la ley 23.696 se aprobó al mes de asumir el presidente Menem– tenía el rol de controlar y seguir las privatizaciones hasta la fecha? Viene a proponerle que los contratos que se renegocien van a tener que ser aprobados por el propio Congreso. Es decir que, por primera vez desde 1989, el Parlamento tiene opinión y voto en la renegociación de los contratos celebrados con las empresas de servicios públicos. Por eso, creo no entender a qué se refiere el señor senador preopinante.

El habló de los informes de FLACSO. Parece que algunos legisladores empezaron a leer lo que FLACSO dice sobre las privatizaciones en los últimos quince días. Sin embargo, FLACSO viene publicando libros sobre el tema desde hace años, denunciado lo que ha venido sucediendo en materia de servicios públicos. A pesar de ello, nunca escuché que se citara a algún miembro de esa universidad para que concurriera a exponer...

Sr. Baglini. – Señor presidente...

Sr. Presidente (López Arias). — Señora senadora: el señor senador Baglini le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Fernández de Kirchner. — No voy a permitir interrupciones; quiero terminar mi discurso.

Entonces, ¿qué hace este gobierno a través del Ministerio de Planificación Federal, que es el que tiene parte y competencia junto con el de Economía en la nueva unidad que estudia la renegociación de los contratos? Contrata a FLACSO, precisamente para ser asesorado por parte de esa universidad que ha estudiado y seguido cómo se han desarrollado los servicios públicos en la Argentina.

Por eso, me resulta incomprensible la posición de quien fuera legislador de este cuerpo durante tantos años y ocupara posiciones tan importantes. Todos sabemos quiénes son los legisladores de uno y otro bloque que siempre intervienen en determinadas negociaciones. Por favor; todos lo sabemos...

Sr. Baglini. — Señor presidente...

Sr. Presidente (López Arias). — El señor senador Baglini le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: todos los bloques saben quiénes son los legisladores que intervienen en estos casos. Todos los bloques saben quiénes son los integrantes de las comisiones revisoras de cuentas desde hace varios años en este cuerpo, y aquellos que jamás podríamos haber sido propuestos para integrar esa comisión de seguimiento de las privatizaciones. Y debo decir que, si alguien me hubiera propuesto formar parte de ella, tampoco lo hubiera aceptado, a lo mejor.

Entonces, ¿qué significa ese discurso con una lectura profusa de diarios acerca de que estamos mandando no sé qué cosa? Si justamente estamos dando intervención al Parlamento por primera vez para que controle la renegociación de los contratos en el marco de una negociación que requerirá justamente para su aprobación final de la venia del Congreso.

Mención aparte merece el intento de identificar los decretos de necesidad y urgencia, la sanción ficta del artículo 82 de la Constitución Nacional, con la situación que estamos describiendo. Y no creo que sea por mala interpreta-

ción de las leyes o por ignorancia. Debo decir que no hay mejor manera de confundir a todos que embarrar la cancha con planteos que no tienen nada que ver.

¿Qué es la sanción ficta de las leyes del artículo 82 de la Constitución Nacional, introducida por los convencionales constituyentes en 1994? En principio —el señor senador Yoma no me va a dejar mentir, porque fue convencional constituyente—, se trató de una solicitud del ex presidente Raúl Alfonsín, miembro de la Convención, quien tenía mucho temor de que por el uso de los decretos de necesidad y urgencia se pudiesen obtener determinadas leyes a las que se había querido poner un candado mediante la consulta popular o el plebiscito. Ello, a fin de que no se pudieran establecer mediante el subterfugio de la sanción ficta, dado que existía alguna interpretación de la Corte acerca de los mentados decretos de necesidad y urgencia. Es decir, la sanción ficta de las leyes fue un candado, después que se discutió la posibilidad incluso en el seno de la Convención Constituyente, para introducir el sistema de enmiendas, de modificaciones parciales en la Constitución. Cuando estamos hablando del reglamento de la comisión que debería controlar los decretos de necesidad y urgencia, que cuenta con mi firma y la de los otros señores senadores, estuvimos haciendo eso. En los decretos de necesidad y urgencia, que son precisamente aquellas situaciones en las que el Poder Ejecutivo se arroga facultades del Poder Legislativo, se pone la limitante del control de esa comisión o de la sanción ficta. Aquí, el Poder Ejecutivo no se está arrogando ninguna ley porque nunca estuvo en cabeza de este Congreso la renegociación de los contratos ni de las tarifas. ¡Nunca, jamás! De 180 dictámenes sólo 20 se refieren a cuestiones tarifarias.

En esta historia de la Comisión de Seguimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se pretende confundir a los decretos de necesidad y urgencia, que son facultades que se arroga con limitantes constitucionales el Poder Ejecutivo, y a la comisión que debiera controlar la sanción ficta de leyes, que está directamente vinculada con ellos, con cuestiones que son instrumentos de resolución? Por primera vez, la Cámara va a poder contar a partir de la sanción de esta ley con intervención en la renegociación de los contratos.

(Continúa en la Segunda Parte)

¿Qué es lo que se está diciendo? Se están diciendo cosas que, por lo menos, no son ciertas. Ya no puedo creer que haya mala interpretación. Pero, en definitiva, éste es el *fast track* que propone el Poder Ejecutivo a los efectos de que el Parlamento controle esto.

¿Por qué se hace? Porque es bueno controlar. Alguien decía que los hombres son buenos pero vigilados son mejores. En este caso, habrá que controlar lo que haga el ministro de Economía y el de Planificación Federal. Y lo tendremos que controlar aquí en el pleno del recinto, no en alguna comisión ni con un grupo de senadores o diputados elegidos y determinados. Lo va a controlar además todo el Parlamento. Además, el decreto 311, que crea la unidad que vincula a Economía y a Planificación Federal, establece el sistema de audiencias y consultas públicas para ello. Con lo cual va a haber muchos controles.

Me parece que no se puede desconocer que estamos precisamente inaugurando una etapa diferente en materia de control por parte del Parlamento en los servicios públicos privatizados, me parecen muy injustas las calificaciones y las cosas que se han dicho, además de inciertas.

Sr. Maestro. – ¿Me permite...?

Sr. Presidente (Gioja). – Senadora...

Sra. Fernández de Kirchner. – No; yo voy a utilizar también el tiempo...

Sr. Presidente (Gioja). – No da interrupciones.

Sra. Fernández de Kirchner. – No doy interrupciones.

Sr. Baglini. – Yo he sido aludido, señor presidente.

Sr. Presidente (Gioja). – El senador Maestro le pedía una interrupción.

Sra. Fernández de Kirchner. – Simplemente, estoy diciendo que quienes integramos este Parlamento tenemos historia en esto, porque nadie de aquí “nació de un repollo” ni apareció ayer en la Cámara de Senadores o de Diputados.

El Parlamento tiene historia en materia de control de las privatizaciones; tienen historia los señores legisladores que estamos sentados en las bancas; tenemos responsabilidades institucionales por lo que se hizo y por lo que no se hizo también. No solamente se hacen cosas sino que muchas veces, al no hacerlas, otros las hacen. Esto es lo que ha pasado.

Reitero, la ley 25.561 fue aprobada por el señor legislador. Además, debo reconocer que lei toda la versión taquigráfica del debate sobre la ley y la discusión no giró en torno a los contratos de los servicios públicos. Prácticamente no se abordó el tema, creo que hay una mención a las pasadas de algún senador o senadora. En realidad, el eje de toda la discusión de aquel debate parlamentario pasaba obviamente como no podía ser de otro modo— sobre el tema de la Ley de Convertibilidad, la constitucionalidad y la pesificación asimétrica. En fin, todo lo que constituyó —por decirlo así— la ruptura del sistema de convertibilidad que había regido en la República Argentina.

Cualquiera de nosotros puede leer todas las intervenciones de los señores legisladores, tanto los que apoyaban como los que se oponían, como los que se abstenían, y todo giraba siempre, como no podía ser de otra manera, alrededor del tema de la convertibilidad, de la devaluación, de los efectos, de la pesificación asimétrica. Absolutamente nadie objetó la facultad concedida al Poder Ejecutivo para renegociar los contratos, y los contratos se renegocian con el parámetro del artículo 9º, porque si estamos prolongando el plazo establecido por el artículo 9º de la 25.561, ¿sobre qué parámetro se cree que van a negociar, que no sean los que establece el artículo 9º de la 25.561? No hace falta ni siquiera ser abogado para establecer esta vinculación, esta necesaria relación y este necesario marco.

Por eso con estas aclaraciones quiero dar una correcta posición, una correcta situación de cuál es el proyecto que estamos abordando, y además pedirles a las autoridades de la Cámara que cuando hagan los giros a comisión lean de qué trata el proyecto, porque de esta manera vamos a ahorrarnos discusiones sobre constitucionalidades y comparaciones con institutos que no tienen absolutamente nada que ver con la situación que estamos tratando. Estamos hablando de que por primera vez, con todos los servicios públicos privatizados, con marcos regulatorios y con cuestiones que se hicieron durante toda esta larga década, que han prefigurado situaciones de hecho, de derecho, con reclamos ante el CIADI por no sé cuántos miles de millones de dólares de las empresas privatizadas, este Ejecutivo, que reitero, por si alguno se olvidó, todavía no ha cumplido tres meses

en la gestión, viene a solicitar al Parlamento autorización para seguir lo que ya estaban haciendo, pero esta vez quiere agregarle el control del Parlamento.

Nada más, señor presidente.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gioja). – A ver, senador Pichetto, vamos a ir por partes.

Sr. Baglini. – Yo he sido aludido.

Sr. Pichetto. – Quiero hacer una moción de cierre de lista de oradores. Habíamos hecho un acuerdo pero...

Sr. Baglini. – ¡He sido aludido y con expresiones que implican una descalificación!

Sr. Pichetto. – Senador Baglini: estoy en uso de la palabra.

Sr. Presidente (Gioja). – El senador Pichetto está en uso de la palabra. Después se la voy a dar a usted, senador Baglini.

Sr. Baglini. – Cuando hay una alusión de esta naturaleza, corresponde que se le dé la palabra a quien ha sido aludido.

Sr. Presidente (Gioja). – Pero usted estuvo hablando media hora, senador Baglini.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Lo escuchamos todo el tiempo. Leyó todos los diarios. Faltó la página deportiva, nada más.

Sr. Baglini. – Yo he respetado a cada miembro de esta Cámara. No he descalificado a ninguno de ellos, como sí lo ha hecho la senadora.

Sr. Pichetto. – Yo tampoco.

Señor presidente: yo planteo volver a un marco de racionalidad porque habíamos acordado una representación de un senador por bloque y ahora hay como veinte anotados, y me parece que no vamos a lograr el objetivo de sancionar la ley. No quiero cortar el derecho a nadie pero sí...

Sr. Baglini. – Le voy a pedir que me conceda la interrupción porque, de lo contrario, voy a tener que plantear una cuestión de privilegio y no quiero hacerlo.

Sr. Presidente (Gioja). – Senador Pichetto: ¿terminó? Hay una propuesta...

Sr. Pichetto. – Pido el cierre de la lista de oradores y les pido a los compañeros...

Sr. Baglini. – ¡Señor presidente...!

Sr. Presidente (Gioja). – Sí, le voy a dar la palabra, senador Baglini.

Hay una propuesta de cierre de la lista de oradores. Está en consideración.

Varios señores senadores. – Lea los que están, señor presidente.

Sr. Presidente (Gioja). – Sí, después leo los que están.

Se va a votar el cierre de la lista de oradores.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). – Están anotados la senadora Escudero, la senadora Sapag... ¿La senadora Negre de Alonso había pedido la palabra para insertar su discurso?

Sra. Negre de Alonso. – La pedí antes.

Sr. Presidente (Gioja). – Senadora Avelín, senador Morales, senadora Ibarra, senador Capitanich, senador Pichetto y están pidiendo una interrupción el senador Baglini y el senador Maestro. Cierra la lista el senador Pichetto.

Tiene la palabra la senadora Escudero. ¿Le concede la interrupción al senador Baglini y al senador Maestro?

Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Gioja). – Previamente al senador Baglini, tiene la palabra el senador Maestro.

Sr. Maestro. – No nos parecen criticables las apreciaciones que pueda hacer sobre la cuestión la senadora por Santa Cruz. Pero sí nos parece que son impropias las alusiones a supuestas participaciones o actitudes del senador Baglini en el desempeño de algunas de las comisiones de esta Cámara o, en su momento, de la Cámara de Diputados. Y como se trata de una cuestión grave porque ha hecho una referencia que implicaría que ha habido actitudes no precisamente justificables, nos gustaría que antes de avanzar en la cuestión nos precisara un poco más a qué hace referencia cuando alegó que todos sabemos qué es lo que pasaba, qué hacían y por qué estaban en esas comisiones.

Sr. Presidente (Gioja). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Yo fui muy clara, señor presidente.

Si quieren recordar lo que yo dije se puede leer la versión taquigráfica. Yo no tengo ningún

inconveniente en que se la lea si es que no lo entendieron bien o se sintieron ofendidos. Yo dije que la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones nunca cumplió el rol para el cual estuvo asignada. Dije que las cosas que pasaban en materia de privatizaciones eran conocidas por quienes integraban las Cámaras de Senadores y de Diputados en sus máximas conducciones, en los bloques y en las comisiones. Dije que integrar las comisiones Revisora de Cuentas, de Presupuesto y Hacienda y de Seguimiento de las Privatizaciones les daba a determinados señores senadores un conocimiento que, por ahí, el resto del cuerpo no tenía; que las cosas se discutían en la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones y no se discutían en el plenario. Pero éstas son verdades objetivas, no son valoraciones y, entonces, cuando veo cómo se manejó durante los últimos diez años el control del Parlamento y lo escucho ahora al senador Baglini, en realidad, la que me tendría que sentir ofendida soy yo y no él, porque está diciendo que este Ejecutivo está queriendo sustraer...; más aún, el que hizo sugerencias fue él, cuando dijo que no había recibido por este proyecto de ley ningún reclamo de las empresas, pero sí había recibido reclamos de los usuarios. ¿Yo le dije qué quería sugerir eso? No. ¿Sabe lo que pasa, señor presidente? Que algunos se pasan de vivos y creen que pueden decir cualquier cosa y que todo es igual. Bueno, en la Argentina no es todo igual. Algunas cosas han cambiado, no todas. Y, además, creo que este Poder Ejecutivo ha sido muy claro, ante presiones que ha tenido, y no sólo ante empresarios de acá, sino directamente cuando jefes de otros Estados o cuando organismos internacionales están hablando de las tarifas de los servicios públicos y demás, lo que es público y notorio.

Por ello, en realidad, algunos sí deberíamos sentirnos ofendidos de algunas cosas, además de los modos con los que leyó los diarios durante casi una hora, porque particularmente imputó a este Poder Ejecutivo el hecho de que quería hacer una cosa diferente.

Invito a que se lean, incluso, los párrafos pertinentes de las opiniones de Baglini, como que el Ejecutivo quería sustraer al Parlamento del control de las tarifas y otras cosas. Esto fue lo que dijo, por lo menos si yo no escuché mal o si no recuerdo mal. Pero ahora resulta que el que

se siente ofendido es él. Yo no me siento ofendida por lo que dijo él. Simplemente, aclaré. Lo que pasa es que cuando los datos son objetivos –repito, objetivos–, cuando en la conformación de las comisiones ahí han estado, cuando ha estado en la actitud de la historia de cada uno de nosotros en los últimos diez años, ya no es pues una opinión o una valoración mía, sino una realidad concreta y objetiva. Pero en realidad si algo puede haber ofendido por las cosas que se han dicho hoy en el recinto fue, precisamente, la alocución del senador Baglini, que intentó decir que con este proyecto el Parlamento va a perder el control en materia de servicios públicos privatizados. Esto es lo que Baglini quiso decir.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sr. Baglini. – Pido una interrupción.

Sr. Presidente (Gioja). – Señora senadora Escudero: ¿le permite una interrupción al señor senador Baglini?

Sra. Escudero. – Se la cedo si va a ser breve.

Sr. Presidente (Gioja). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Baglini.

Sr. Baglini. – Ni yo quiero colocarme en la posición de Calvo Sotelo ni ponerla a la señora senadora en la de La Pasionaria. Pero está claro que lo que dijo en su primera intervención no es lo mismo que dijo ahora. En su primera intervención dijo claramente que todos sabemos qué pasaba con algunas comisiones.

Yo quiero aclararle a la señora senadora –porque la historia es pública y hay versión taquigráfica– que yo me opuse en la 23.696 a todo su contenido y a la creación de la Comisión de Privatizaciones. Les consta a muchos senadores de esta Cámara que he discutido en mi bloque proponiendo suprimirla. Les consta además que tengo más de cincuenta denuncias penales que me granjearon hasta la enemistad de algunos funcionarios de gobierno. Desde el ministro Dromi hasta José Stenssoro o María Julia Alsogaray he tenido, por lo menos, cinco denuncias. Y, justamente, la última hoy está detenida a raíz de una denuncia formulada por mi por uso indebido de fondos reservados.

Señor presidente: a mí me tocó armar el informe del Comité Nacional sobre la corrupción en la época de Menem que, por primera vez en

la historia de este país, motivó que el Comité, presidido por el senador Losada, fuera querellado por el presidente de la Nación.

De manera que la historia la tenemos absolutamente presente y también tengo claro todas las cosas que dije, en las que no hay ninguna distorsión.

La comisión especial a la que alude la señora senadora es la misma comisión especial que preside la senadora Seguí, citada en el propio proyecto del Poder Ejecutivo en su artículo 4º y que figura como Comisión de Seguimiento.

Sra. Seguí. – No está citada...

Sr. Baglini. – Está citada en el artículo 4º

Sra. Seguí. – No es la comisión que yo presido, señor senador.

Sr. Baglini. – Además de eso acá se ha puesto en duda la interpretación del artículo 82 de la Constitución Nacional.

Ese artículo tiene una clara historia y es el fallo Peralta de la Corte Suprema de Justicia, que interpretó que el silencio del Congreso equivale a voluntad del Congreso.

Sr. Yoma. – No es así.

Sr. Baglini. – Lo que dice el artículo 82, que el señor senador Yoma conoce muy bien, es que la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. No puede haber silencio del Congreso.

Sr. Yoma. – El fallo Peralta...

Sr. Presidente (Gioja). – Diríjase a la Presidencia, senador Yoma.

Sr. Baglini. – El señor senador sabe perfectamente que en ese fallo el centro del problema, además de ser un decreto de necesidad y urgencia, es que el silencio del Congreso equivale a voluntad del Congreso.

Por eso, el artículo 82 alude a que la voluntad de la Cámara tiene que manifestarse expresamente y no se admite la sanción ficta.

¿Qué dice el artículo 4º? Que cumplido el plazo sin que se haya expedido el Congreso de la Nación, se tendrá por aprobada la misma. Eso es silencio del Congreso. Eso es falta de voluntad del Congreso y es lo que está prohibido en el artículo 82, más allá de que haya empleado felizmente o no el término de los decretos de necesidad y urgencia. Eso está claro.

Está también claro que con el dictado de quinientos decretos de necesidad y urgencia poco podía controlar el Congreso.

Si hemos tenido alguna falencia en ese control no fue porque no hayamos recurrido a los tribunales de justicia. En más de una oportunidad hemos tenido un denuesto en esas condiciones.

Pido disculpas a la señora senadora si en algún momento de mi intervención la he ofendido. Pero me parece que está claro que lo dicho es la verdad y no puedo admitir, ni siquiera por la interpretación dudosa de las palabras, que haya tenido alguna actitud aviesa en ninguna comisión de contralor.

Sr. Presidente (Gioja). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Mejor dicho querrá decir que empiezo con el uso de la palabra.

Señor presidente: hace mucho que no coincido con la señora senadora Kirchner, pero en este momento sí lo voy a hacer en el tema de que en algunas comisiones siempre están los mismos. Tal el caso de la Comisión Revisora de la Cuenta de Inversión.

En el bloque se había acordado que debía ingresar la senadora Nélida Martín, pero aún es una asignatura pendiente. Entonces, sería un buen viento de cambio que en el Senado se hicieran algunas modificaciones en esa comisión tan importante.

Con relación al proyecto en tratamiento, tuve inquietudes respecto de tres temas: tarifa social, marcos regulatorios y el tan cuestionado artículo 4º y el denominado *fast track*.

Mucho se ha hablado demonizando a las privatizaciones. Quiero dar testimonio de la experiencia de mi provincia.

Entre 1996 y 2003 se hicieron inversiones en servicios públicos por 4.100 millones de pesos. Eso se tradujo en la construcción de 1.630 kilómetros de redes de agua potable, 1.300 kilómetros de redes de cloacas, acreciendo conexiones en el orden del 98 por ciento en agua y del 25 por ciento en cloacas a través de la incorporación de 340 mil personas a los servicios sanitarios. También se hicieron 2.400 kilómetros de nuevas líneas de distribución que abastecen al 90 por ciento de los habitantes de la provincia.

De modo que lo cuestionable no son las privatizaciones, sino que se hagan sin control ni transparencia.

A medida que avanzaba y se agudizaba la crisis en 2000, la mayoría de las personas que atendía en mi provincia pedía trabajo o ayuda para pagar las facturas de los servicios públicos.

Esto me llevó a trabajar con el ente regulador de mi provincia, a los efectos de tratar de encontrar la forma de subsidiar a estos sectores más desprotegidos.

Cuando llegué al Senado de la Nación seguí trabajando en pos de llevar el tema de la tarifa social a un proyecto. Y es así que hace un año presenté el proyecto de tarifa social, el cual se comenzó a considerar en este Senado recién hace tres meses, cuando ingresó un proyecto sancionado por la Cámara de Diputados en ese sentido.

Creo que el senador Baglini ha sido absolutamente claro cuando manifestó que lo que está en juego aquí —si bien vamos a autorizar la revisión de los contratos— son las tarifas. Efectivamente, la devaluación ha provocado una ruptura del equilibrio de los contratos y por eso deben ser revisadas.

Considero que hoy, más que nunca, debemos dar una solución y, entre todos, esforzarnos en solucionar el tema de la tarifa social, que consiste nada más ni nada menos que en proteger a los sectores que se vieron más afectados y empobrecidos por la devaluación.

Habiéndole planteado este tema al ministro en su visita al Senado, dos días después recibí una nota donde nos invitaba a intercambiar datos con sus equipos técnicos justamente para tratar de acordar un proyecto de tarifa social.

De modo que tengo absoluta confianza en que con la aprobación de este proyecto —y con el trabajo técnico que se realizará—, el Poder Ejecutivo llevará adelante el tema de la tarifa social. Además, todos sus discursos están orientados en ese sentido. No me cabe duda de que cuando venga el aumento tarifario, se tendrá una solución para las franjas más desprotegidas de la sociedad.

Con relación a los marcos regulatorios teníamos algunas dudas, las cuales fueron perfectamente evacuadas por el ministro cuando se comprometió públicamente a que toda modificación

de los marcos regulatorios sería presentada a este Congreso mediante el respectivo proyecto de ley.

Incluso en el decreto que emitió el Poder Ejecutivo se plantea un proyecto de ley único de marco regulatorio, situación que creo no será posible instrumentar. Considero que tendrán que elaborarse varios proyectos. De todos modos, el ministro de Infraestructura ha tomado el compromiso de hacerlo por ley.

Esto es muy importante, porque justamente las críticas y los cuestionamientos que se les hicieron a los procesos de privatización en la Argentina —y leía un informe del Joint Economic Committee del Congreso de los Estados Unidos—, son aquellos que se efectuaron por decreto de necesidad y urgencia, sin alcanzar los consensos y debates necesarios a través del Parlamento.

Por eso me parece absolutamente sano que toda modificación de los marcos regulatorios se realice por ley.

Finalmente, en cuanto al artículo 4º, veo que es allí donde tenemos más dificultades. Por eso creo que es muy importante tratar de adecuar la correcta interpretación que le daremos. No se trata de decretos de necesidad y urgencia, sino de facultades que delegamos en el Poder Ejecutivo.

La competencia de renegociar los contratos es del Poder Ejecutivo. Lo que el Congreso ha delegado es el establecimiento de los criterios que deben guiar la renegociación.

En el artículo 9º...

Sr. Yoma. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Me concede una interrupción?

Sr. Presidente (Gioja). — El senador Yoma pide una interrupción. ¿Se la concede, senadora Escudero?

Sra. Escudero. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Gioja). — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: acá no hay facultades delegadas porque nunca el Congreso tuvo facultades para negociar tarifas. Lo que existe —creo que esto es lo valioso de la ley y quiero ratificar la posición tanto del Ejecutivo como la expresada por la senadora Kirchner—

es, por primera vez, el rol del Congreso en esto. Digamos que es un rol que el Ejecutivo le concede al Congreso como órgano de control, por primera vez, de manera efectiva.

La senadora Kirchner recién mencionaba un caso que fue realmente escandaloso: cuando el Congreso se quiso arrogar una facultad porque desconocíamos el contenido de un dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Esto fue en 1997-1997-, en la época del presidente Menem. Esa concesión fue la del Ferroexpreso Pampeano. Allí el Estado -en nuestro gobierno; no estamos hablando del gobierno de la Alianza sino de nuestro gobierno- perdonaba a las empresas cánones adeudados y les prorrogaba los contratos. Nosotros aquí presentamos un proyecto de resolución para derogar ese dictamen, que ni conocíamos. Sólo había trascendido. Y no se conocía porque no se publicaban los dictámenes. Tiene razón la senadora Kirchner...

Sra. Escudero. - Señor presidente...

Sr. Yoma. - No se publicaban los dictámenes.

Termino: acá no estamos delegando. Estamos asumiendo una facultad de control que nos cede el Poder Ejecutivo. Es cierto que el Congreso no la ejerció porque la comisión no era eficaz. Nadie conocía los dictámenes. No se publicaban. En ese momento presentamos un proyecto para que se publicaran los órdenes del día. No podía ser que hubiera una comisión en el Congreso cuyos dictámenes no fueran públicos. No pudimos lograrlo.

Entonces, quiero que hagamos la crítica, pero sobre bases reales. No hay sanción ficta. El Congreso no puede ejercer el control por una ley porque, si no, estaríamos sometiendo el control al veto del Poder Ejecutivo. El Congreso va a ejercer el control con una resolución conjunta, con lo cual no hay sanción ficta del artículo 82 porque es una resolución, no una ley.

Sr. Baglini. - Es peor.

Sra. Escudero. - Gracias, señor presidente. No voy a conceder más interrupciones porque el tiempo se agota.

Creo que el proyecto de ley, en lo referente al control que llevará a cabo este Congreso sobre la base del dictamen que eleve a ambas Cámaras la comisión de control, debe ser interpretado de modo tal que no dé lugar a la posibilidad de

que el Parlamento vaya a concurrir a formar la voluntad contractual de la administración.

El Poder Legislativo, en materia de contratos administrativos, regula las condiciones de cada tipo de contratación: por ejemplo, ley de obras públicas, ley de empleo público, de peajes, etcétera; en especial en servicios públicos, por ser productores de efectos jurídicos a terceros ajenos al contrato. Es la administración la que procede a seleccionar al contratista estatal y a suscribir las contrataciones.

Debemos evitar, entonces, la creación de competencias donde no existen o extender competencias hasta donde la Constitución no lo tolera. Si el Poder Legislativo ha delegado competencias en el artículo 1º de la ley 25.561 fijando plazo y condiciones de ejercicio, corresponde al Poder Ejecutivo por sí que las ejercite dentro de las bases de la delegación. Dicho ejercicio, a su vez, podrá ser analizado y controlado por el Congreso en el marco de la Comisión Bicameral de Seguimiento, la cual emitirá dictamen; pero ese dictamen no será vinculante -ningún dictamen lo es- ni deberá ser aprobado por ley del Congreso.

Lo que no corresponde al Congreso, dentro del marco constitucional legal que vertebra este proceso, es confluir a la formación de la voluntad contractual del Poder Ejecutivo, con este alcance; es decir, que la facultad de control de la comisión de seguimiento lo será de control de la actuación del Ejecutivo en el marco de sus competencias.

De ninguna manera me parece que podamos nosotros como Congreso formar parte de una voluntad renegociadora de un contrato en el cual no tuvimos nada que ver. No tenemos competencia de renegociación y mucho menos podremos tener responsabilidades por esa renegociación.

Con esta interpretación, no tengo ningún problema en apoyar el proyecto tal como viene del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Gioja). - Tiene la palabra la señora senadora Sapag.

Sra. Colombo. - Señor presidente....

Sr. Pichetto. - Está cerrada la lista de oradores.

Sr. Presidente (Gioja). - Está cerrada la lista de oradores.

Le piden una interrupción, señora senadora Sapag.

Sra. Colombo. – No es posible. Le pido nuevamente que me dé la palabra.

Sr. Presidente (Gioja). – Senadora Sapag: le pide una interrupción la senadora Colombo.

Sra. Sapag. – Concedo la interrupción.

Sr. Presidente (Gioja). – Está concedida la interrupción, senadora Colombo.

Sra. Colombo. – Señor presidente: lo único que falta es que las interrupciones solamente puedan darse entre los miembros del bloque mayoritario de este Senado. ¿Por qué no dan las discusiones en las reuniones de bloque y evitan este prolongado debate en el recinto?

Quería señalar, en función de lo que dijo el senador Yoma, que el Poder Ejecutivo nacional, con este dictamen de la mayoría que se está por aprobar, no nos está concediendo nada graciosamente, porque las potestades de control las tenemos como Poder Legislativo nacional. Eso es todo.

Sr. Yoma. – Eso no es así; si no quiere no las concede, y no viola ninguna ley...

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra la señora senadora Sapag.

Sra. Sapag. – Señor presidente:...

–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Gioja). – ¡Por favor, señores senadores...!

Está en uso de la palabra, señora senadora Sapag.

Sra. Sapag. – No queda claro en el texto del proyecto que estamos tratando si la extensión del plazo para renegociar los contratos de obras y servicios públicos se va a realizar o no en el marco de la emergencia pública dispuesta por la ley 25.561. Como el texto no aclara este punto, parecería que la renegociación se va a realizar en un marco de normalidad jurídica institucional, ya que sólo se pide una prórroga para renegociar los contratos, pero no se prorroga la emergencia.

Creo que las condiciones de renegociación serían distintas si se hiciesen dentro de la emergencia. Dentro de la emergencia el Estado tiene más facultades, un poder de negociación más fuerte, justamente por la situación de emergencia que atraviesa el país actualmente. ¿Por qué

no aclara el proyecto enviado por el Ejecutivo este punto, siendo que el país no ha salido aún complementado de la crisis en la que estuvo inmerso y por la declaró la emergencia?

Creo que es conveniente hacer la renegociación dentro de este marco de emergencia, ya que es más beneficioso para el Estado negociar en estas condiciones. Si por ejemplo no se llega a un acuerdo, serían menores las compensaciones que percibirían las empresas prestatarias de servicios públicos por la revocación de sus contratos o licencias.

Para mí el artículo 1° debería estar redactado de la siguiente manera: “Prorrógase la declaración de emergencia pública dispuesta por el artículo 1° de la ley 25.561 hasta el día 31 de diciembre de 2004, al solo efecto de autorizar al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de obras y servicios públicos contemplados en el artículo 9° de la ley 25.561”.

¿Estamos pensando en los usuarios o en las empresas?

Con respecto a la delegación de facultades, al no aclararse el tema de la emergencia, el proyecto no establece o no se sabe a ciencia cierta dentro de qué supuesto del artículo 76 de la Constitución Nacional se hace la delegación legislativa de facultades en el Poder Ejecutivo. Es decir, si es en el marco de una emergencia pública, que pareciera no serlo según la redacción actual del proyecto, o si es en el marco de materias determinadas de administración. ¿Este es el caso?

Más allá del supuesto en que se realice tal delegación, tampoco se aclara cuáles son las bases de dicha delegación, es decir, las reglas o límites impuestos a la actuación del Poder Ejecutivo, circunstancia que sí estaba prevista en la ley 25.561 en su artículo 1°.

Tampoco se aclara si se tendrán en cuenta a los fines de la renegociación los criterios del artículo 9° de la ley 25.561, que sería bueno recordar.

El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.

Dentro del primer criterio, sería necesario la inclusión de una tarifa social para los servicios esenciales. Este proyecto no prevé una tarifa social, pese a que muchos senadores hemos trabajado para lograr la aprobación que contemple una tarifa diferencial para los sectores de menores recursos.

Si estamos autorizando el aumento de tarifas, es indispensable que se incluya una de índole social que comprenda a los sectores más vulnerables de la población; quienes no están en condiciones —de acuerdo con los altos índices de pobreza y desempleo que hay en nuestro país— de afrontar ningún incremento en los servicios básicos.

Cualquier ley que se apruebe y no contemple una tarifa social estará destinada a fracasar en el corto plazo, ya que gran parte de la comunidad no cubre sus necesidades básicas —apenas si le alcanza para comer—; y no se quedarán de brazos cruzados, protestando y manifestándose si no se la tiene en cuenta.

Con respecto a los marcos regulatorios de los distintos servicios, resulta cuestionable no tenerlos en cuenta en el proceso de renegociación. Los marcos regulatorios son los que rigen la relación contractual que se pretende renegociar. Por lo tanto, no tenerlos en cuenta sería afectar la seguridad jurídica y el derecho de propiedad de los actores involucrados, que sin dudas dará lugar a diversos planteos tanto en el ámbito judicial nacional como el internacional. Incluso, dicha norma podría estar violando los tratados de protección de inversiones suscritos por la Argentina con distintos Estados, con el consiguiente perjuicio para nuestro país.

Además, dejando de lado los marcos regulatorios —que es la normativa preexistente—, parecería que estamos comenzando una nueva negociación y relación contractual, en lugar de llevarse a cabo una renegociación de los contratos ya existentes.

Como última observación al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, encuentro que el artículo 4º viola abiertamente el artículo 82 de la Constitución Nacional, el cual establece muy claramente que la voluntad del Congreso debe manifestarse en forma expresa, prohibiendo en todos los casos la aprobación tácita de las leyes.

Asimismo, si nos encontramos en el marco de una delegación de facultades en los términos

del artículo 76 de la Constitución Nacional —la autorización para renegociar—, mal puede pensarse que el sujeto delegante —o sea el Congreso— se autolimita en sus competencias en beneficio del delegado; hasta llegado el punto de autoimponerse un plazo perentorio —60 días corridos— para expedirse en forma expresa o tácita sobre los acuerdos de renegociación concertados por el Poder Ejecutivo.

Señor presidente: por todos los argumentos expuestos, dejo manifestado mi voto negativo al presente proyecto.

Sr. Presidente (Gioja). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: ante todo quiero anticipar que voy a solicitar la inserción de los fundamentos de mi voto que, en calidad de presidenta de la Comisión de Legislación General, había elaborado para la ocasión.

Pese a esto, voy a hacer en este debate dos o tres aclaraciones que no puedo dejar de formular. En primer lugar, el quid de la cuestión es determinar si se trata de una facultad originaria o derivada del Poder Ejecutivo.

Desde 1939, con el “caso Ventafrida”, vinculado con una renegociación de tarifas telefónicas, la Corte Suprema viene diciendo en forma reiterada, pese a sus variadas conformaciones, que ésta es una facultad originaria del Poder Ejecutivo. Y esto que sostiene desde antes de la reforma constitucional, lo reiteró en el “caso Prodelco c/ Poder Ejecutivo”, donde señala que es una facultad privativa de Poder Ejecutivo, así como también en el “caso Fernández, Raúl c/ Estado Nacional s/ Amparo” y en el caso 262:555, donde sostiene que la cuestión de las tarifas debe ser aprobada por el Poder Público como parte de la policía del servicio de tarifas. Por lo tanto, esto no constituye un tema discutible; se trata de una facultad originaria del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, cuando se sancionó la ley 24.065, el decreto 13/92 vetó los incisos 3 y 4 del artículo 23 de la norma, por el que se establecía un carácter vinculante al dictamen que debía emitir la Comisión Bicameral, ya que desnaturalizaba el principio de división de poderes establecido en la Constitución y, además, porque se pretendía que el Poder Legislativo asumiera una función que era originaria del Poder

Ejecutivo. Consecuentemente, creo que sobre esto no hay discusión.

Sobre la base de esto que he señalado, se puede opinar acerca de la constitucionalidad o no de la norma que estamos considerando, porque si partimos de la base de que no es una facultad del Poder Ejecutivo se distorsiona todo el sistema.

Con respecto a la ley 25.561 quisiera decir que se fagocita todo el sistema tarifario con el artículo 8º, produciéndose en ese sentido una absoluta laguna. En efecto, el artículo 8º de la ley de emergencia modifica toda la ecuación de estos contratos. Por su parte, el artículo 9º podría estar o no en la ley de emergencia, porque si nosotros decimos que el negociar es una facultad originaria del Poder Ejecutivo, y la ley de emergencia suprime el sistema tarifario sobre la base de la actualización de la moneda extranjera o de índices de países extranjeros, deja sin marco económico al contrato. Entonces, el Poder Ejecutivo no necesitaba el artículo 9º dentro de la ley de emergencia, porque si estamos sosteniendo que el negociar es una facultad propia del Poder Ejecutivo, entonces, dentro de esas mismas facultades, tiene que continuar negociando.

En cuanto a los marcos regulatorios quisiera decir que se torna necesario modificarlos porque, en caso contrario, el Poder Ejecutivo no puede ser efectivo. Así por ejemplo, en virtud de los artículos 41, 42 y 44 de la ley que establece el marco regulatorio del sector del gas, el Poder Ejecutivo, para poder llevar adelante esta revisión de los contratos, necesariamente tiene que marginar el marco regulatorio en todo lo que sea necesario.

Por otro lado, creo que durante la presentación efectuada por el señor ministro en este Senado, quedó absolutamente claro que no se trataba únicamente del tema de las tarifas. Esto lo digo porque en mi informe acompañó un anexo al artículo 3º que dice: "Temas no tarifarios a contemplar, enunciativos. Revisión de los costos operativos. Metodología para determinar la tasa de rentabilidad. Revisión del régimen de calidad del servicio. Reedición del régimen de sanciones".

Consecuentemente, creo que para transitar el camino de la renegociación de estos contratos, es necesario que, en ese sentido, se deje de lado el marco regulatorio.

Quería hacer...

Sr. Pichetto. – Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Gioja). – ¿Le concede la interrupción, señora senadora?

Sra. Negre de Alonso. – Sí.

Sr. Presidente (Gioja). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: mi intención no es cortar el uso de la palabra a la señora senadora. Pero he notado que nos estamos quedando sin quórum porque se están retirando senadores. De continuar esto así no vamos a poder votar esta iniciativa y, consecuentemente, este esfuerzo de quedarnos va a resultar estéril.

Sr. Presidente (Gioja). – Les pido a los señores senadores que continúen en sus bancas.

Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Al comienzo de mi exposición dije que quería insertar las palabras que pensaba pronunciar.

Simplemente, lo que estoy haciendo ahora es puntualizar algunas cuestiones, porque se está diciendo que no se va a votar esta norma, pues se trata de una delegación legislativa en el marco de una emergencia.

Entonces, lo que estoy tratando de hacer con mis aclaraciones es echar luz sobre el criterio de algunos senadores con el fin de que acompañen el proyecto. Desde mi punto de vista, y esto lo digo con el máximo de los respetos, entiendo que se está haciendo una interpretación básica errada.

Entonces, como se parte de una cuestión de una naturaleza jurídica diferente de la que corresponde, lógicamente el razonamiento final es distinto.

Finalmente, solicito la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente: voy a ser también breve, en virtud de la hora, y a fin de que este proyecto sea aprobado en esta sesión.

Creo que es muy importante que en el país por primera vez se tenga una decisión política clara y concreta de encarar un estudio de todo el proceso de privatización que se ha producido

en la Argentina. Máxime en función de los datos aquí aportados, es decir, porque no hubo controles, ni marcos regulatorios; porque hubo negocios redondos y mercados cautivos y se entregó a precio vil nuestro patrimonio estratégico a manos privadas.

Por ello, es altamente positivo que hoy exista un proyecto del Poder Ejecutivo con una clara decisión de producir un proceso de renegociación al respecto.

Digo esto porque, lamentablemente, hace pocos meses un presidente de la Nación no electo por el pueblo —me refiero al ex presidente Duhalde—, con un discurso dual hizo caso omiso a las facultades para la renegociación de los contratos que surgían de la ley de emergencia.

Efectivamente, por un lado, el 2 de octubre de 2002 su jefe de Gabinete de Ministros, cuando concurrió al Congreso, manifestó en su informe ante los legisladores nacionales que, teniendo en cuenta que en la emergencia siempre es preciso proteger a los más castigados por la crisis, las tarifas siguen estabilizadas. Sin embargo, se esperó a que terminaran las sesiones ordinarias de este Parlamento para, luego de ello, dictarse el decreto de necesidad y urgencia 2.437/02, que en nada se compadecía con la necesidad de proteger a los más castigados por la crisis, ya que en virtud de éste se aprobó un aumento en las tarifas de los servicios de la electricidad y el gas. Todos sabemos cómo siguió ese trámite en la Justicia.

Resalto que dicho aumento de tarifas se produjo en el momento de mayor crisis del país, cuando la devaluación provocaba un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo de los argentinos.

Por eso, cuando hoy vemos que el presidente legitimado por el voto popular toma la fuerte decisión de plantear la renegociación de los contratos y, a su vez, señala al Congreso que las propuestas de esos acuerdos van a ser enviadas para su control al Parlamento, creo que hay que acompañarlo.

Considero que hay que apoyar este proceso y dar al presidente todas las herramientas que pide y solicita, porque como muy bien dijo la señora senadora Fernández de Kirchner, todos conocemos las presiones que sufren el Poder Ejecutivo y el país ante los organismos

acreedores. No podemos desconocer que el Fondo Monetario Internacional y los otros organismos acreedores ven como un tema clave para el acuerdo con el Fondo y para la refinanciación de la deuda el tema de las tarifas de los servicios públicos. De modo que sabemos lo que significan esas presiones. De hecho, tenemos la convicción de que hemos perdido hasta un gobierno provincial por resistir las presiones de la usura internacional. Pero tenemos un país quebrado, que tiene su gente quebrada, en el cual los más pobres han sido quienes más han sufrido el impacto de esta situación.

Por ello, me complazco en que exista hoy una decisión política firme de encarar un proceso de renegociación con esta claridad y que el Congreso, por primera vez, tenga la posibilidad de conocer las propuestas que se formulen.

— Murmullos en el recinto.

Sra. Avelín. — Señor presidente: lamento que al presidente de la bancada justicialista le molesten mis palabras...

Sr. Presidente (Gioja). — Señora senadora Avelín: continúe en el uso de la palabra.

Sra. Avelín. — Señor presidente: formo un bloque minoritario y unipersonal y he acompañado durante todas estas horas el debate en el recinto.

Es lamentable que a partir de que he comenzado a plantear mis convicciones he tenido que ver el espectáculo de las descalificaciones que se realizan a través de gestos. Lo lamento, porque el bloque mayoritario debería tener la responsabilidad de acompañar y otorgar el quórum, y no los bloques minoritarios, los cuales estamos aquí presentes por convicción y por compromiso con el país:

De modo tal que en este proceso de renegociación de los contratos advierto que el Poder Ejecutivo está pidiendo la postergación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2004. Y si bien sobre el particular tuve dudas en cuanto al tema del marco de la emergencia, me quedó muy claro con las palabras pronunciadas por la senadora que defendió el proyecto, que también fueron confirmadas por otros senadores, cuál es el criterio de la norma, así como también cuáles fueron los criterios respecto del artículo 9º de la ley 25.561, de emergencia.

De modo tal que para no demorar más esta sesión y lograr la sanción de esta herramienta clave para sostener esta decisión política vamos a acompañar este proyecto.

Además, solicito la inserción del resto de los argumentos, porque acompaño como elementos el criterio de muchos senadores que en octubre de 2002, por ejemplo, presentamos proyectos vinculados con el rechazo enérgico a la presión que estaba ejerciendo el Fondo Monetario respecto de las tarifas de los servicios públicos, entendiendo que tal presión constituía una violación a nuestra soberanía nacional. Me estoy refiriendo al expediente 2789/02.

A posteriori se presentó el proyecto de declaración S.-3.336/02, presentado el 12 de diciembre del año pasado, de la senadora Colombo y quien habla, a través del cual se declara el rechazo al aumento de las tarifas del gas y de electricidad. Al respecto, aclaro que el gas ha aumentado el 120 por ciento gracias al decreto 2.437. Y finalmente, el proyecto de ley S.-3.337/02 por el que se deroga el decreto del Poder Ejecutivo 2.437/02 por los argumentos ya expuestos.

En virtud de lo expuesto, solicito autorización para insertar estos elementos y complementar esta fundamentación que me permite acompañar positivamente el presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Gioja). – Oportunamente votaremos las inserciones.

Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: también solicito autorización para insertar nuestra posición, que sostiene un dictamen de minoría y que agrega en el artículo 2° un texto que señala que en todos los casos deberá garantizarse la participación de los usuarios.

Por su parte, el dictamen que proponemos, en el artículo 4° agrega que dichas propuestas deberán establecer en todos los casos y para todos los contratos de servicios públicos sistemas expresos de tarifa social para los usuarios en estado de vulnerabilidad económica con aportes del Estado, empresas y usuarios. También deberán establecer la obligación a las empresas prestatarias de incluir en los respectivos planes de inversión los programas anuales que

garanticen la accesibilidad de dicho servicio por parte de futuros nuevos usuarios.

Y en el artículo 4° también se elimina el plazo de 60 días señalando que le corresponderá al Congreso de la Nación expedirse sobre la propuesta de acuerdo de renegociación de manera expresa. Eso es lo que estamos planteando en el dictamen de minoría y solicito autorización para insertar los argumentos.

Sr. Presidente (Gioja). – Oportunamente lo votaremos.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a hacer una sola acotación muy breve, porque también solicito la inserción del discurso que tenía previsto pronunciar.

Efectivamente, estamos de acuerdo en que es facultad propia del Poder Ejecutivo renegociar los contratos y es facultad propia del Poder Legislativo constitucional el ejercicio de control sobre la Administración Pública.

Ahora bien, aprobar o rechazar no es facultad propia constitucional del Poder Legislativo. Digo esto porque hoy se está hablando de una supuesta sanción ficta. Y esto quiero dejarlo en claro, porque bien dijo la senadora Kirchner que cuando se trató la ley 25.561 prácticamente fuimos muy pocos los que hicimos referencia a este tema. Yo lo hice; y tengo aquí la versión taquigráfica en donde consta que expresamente pedí que el tema se tratara mediante la aprobación del Parlamento, en un debate público sobre la renegociación de tarifas.

Sin embargo, no fui acompañada por quienes hoy parecen escandalizarse por lo que suponen que es –aunque no es así– una sanción ficta de ley. También recuerdo que en la Cámara de Diputados el diputado Melillo hizo el mismo pedido, para que esto se tratara por vía del Congreso.

Señalo esto porque lo que hoy está proponiendo el Poder Ejecutivo es precisamente la intervención del Congreso por primera vez; una intervención que no pidió este cuerpo en el momento en que se aprobó la ley 25.561 y que en soledad algunos legisladores sí solicitamos.

Con esta aclaración, dejo pedida la inserción.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el último orador, señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Yo también solicito que se inserte mi discurso. Pero hay algunos puntos que me parecen importantes para clarificar en el recinto diversas cuestiones vinculadas con este proyecto de ley.

En primer lugar, aquí se discutió respecto del tema de la extensión o la prórroga. Al respecto, debo señalar que simplemente se trata de una extensión, en virtud de que no se establece ningún tipo de prórroga respecto de la ley 25.561, de emergencia económica. ¿Por qué? Porque cuando vence el plazo correspondiente, el proceso complejo de reestructuración de los contratos correspondientes determina la posibilidad de que se pueda ejercer como plazo máximo el 31 de diciembre de 2004, sin que esto signifique que ese sea el plazo total del proceso de renegociación; es decir que el plazo puede ser inferior.

En segundo lugar, respecto de los marcos regulatorios correspondientes, los mismos no se aplicarán en tanto y en cuanto contradigan el proceso de renegociación en sí. Es decir que si en la renegociación del contrato se pautan nuevos parámetros de fijación de calidad de servicios, de tarifas, etcétera, obviamente no se podrá aplicar el mismo marco regulatorio preexistente. Por lo tanto, no hay una contradicción entre el texto de la iniciativa y lo que se pretende.

En tercer lugar, los acuerdos parciales son perfectamente factibles de ejecutar en el marco de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo.

En cuarto lugar, el Poder Ejecutivo ha introducido un proceso mediante el cual el Congreso tiene la facultad de aprobar los contratos renegociados o no. En ese sentido, en ambos casos, no existe una sanción ficta porque no existe una ley correspondiente. De manera tal que no se aplica el supuesto del artículo 82 de la Constitución Nacional.

Y, por último, creo que este proyecto de ley tiene la particularidad de dar una intervención activa al Congreso con relación a los parámetros básicos que deberían considerarse en la renegociación, en el marco de los cincuenta y nueve contratos que estarían sometidos a este proceso. Es decir que el Parlamento intervendrá no solamente el tema de calidad de servicios sino otra serie de cuestiones que el

ministro de Planificación Federal, De Vido, ha planteado oportunamente cuando vino a este recinto.

Sr. Presidente (Gioja). – Vamos a votar las inserciones.

Tiene la palabra el señor senador Pardal.

Sr. Pardal. – Solicito que se inserte el resto de mi explicación.

Sr. Presidente (Gioja). – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). – Se procederá en consecuencia.¹

A continuación, se va a votar la autorización para votar por signos.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). – En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Para no romper los nervios del presidente del bloque justicialista, solicito insertar en particular las observaciones que tengo sobre los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sr. Presidente (Gioja). – Lo votamos al final, señor senador.

–Se enuncian y aprueban los artículos 1º a 6º.

–El artículo 7º es de forma.

Sr. Presidente (Gioja). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Como no hay más temas que tratar, queda levanta la sesión.

–Son las 4 y 25 del jueves 21 de agosto.

JORGE A. BRAVO
Subdirector a/c del Cuerpo de Taquígrafos

¹ Ver el Apéndice.